



Resolución No. No 0 5 3 3

07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el Doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, el Decreto Distrital No. 191 de junio 8 de 2006, el Decreto Distrital 550 del 29 de diciembre de 2006, el Decreto Distrital 001 del 2 de enero de 2008, y

CONSIDERANDO

I. Que el 5 de abril de 2006, mediante escrito con radicación 1-2006-16705 el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA en su calidad de CONTRALOR DE BOGOTA D.C., solicito ante el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. la revocatoria de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998 (folios 26 a 38 exp 98-2-0945), CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999 (folios 54 a 56 exp. 99-2-0557), CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001 (folios 124 a 125 exp. 2000-2-1378), CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 (folios 204 a 214 exp. 2002-2-0461) y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000 (folio 84 A exp. 99-02-1145), LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 (folio 250 A exp. 2002-2-0601) y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002 (folio 269 A exp. 2002-2-0676), expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C. En síntesis, los argumentos para solicitar la revocatoria directa de los actos administrativos citados en precedencia son:

- REFERIDOS A LA ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA Y SITUACIÓN DE RIESGO DEL PREDIO,

Señala el solicitante de la revocatoria directa, que el artículo 6º numeral 2. de la Licencia de Urbanismo expedida mediante Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, relacionado con la Zonificación Geotécnica del predio, dispone que "Según mapa de zonificación geotécnica, elaborado por Ingeominas en 1.988 se establece:

Zona de riesgo:

Observaciones:

Recomendaciones:

IIIM

Zonas de deslizamientos y cárcavamientos activos y potenciales.

El uso inadecuado de suelo puede agudizar el fenómeno de la erosión."



Continuación de la Resolución No. 0 5 3 3

07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Contrario a lo anterior, ese Organismo de Control Fiscal evidenció que según el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá, elaborado por INGEOMINAS con ocasión del Convenio No. 200-86, suscrito con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital -DAPD-, que debió ser tenido en cuenta al momento del otorgamiento de la licencia de Urbanismo No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, "...determina que el predio objeto de la misma se encuentra en zona V-AM de muy alto riesgo y no en zona IIIM de riesgo medio como lo señala la Curaduría Urbana No. 2 en la precitada Resolución" (subrayado fuera de texto). En consecuencia, según lo previsto en los Decretos 734 de 1993 y 657 de 1994, no era viable autorizar tanto la urbanización como la construcción de los inmuebles, al igual que la prestación de servicios públicos domiciliarios en los predios que actualmente ocupa la Urbanización San Cayetano.

- **REFERIDOS A LA PROHIBICIÓN DE ADELANTAR OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL PREDIO**

Argumenta además el CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., que la exclusión a la que hace referencia el mencionado artículo 3° del Decreto 734 de 1993, subsistía al momento de la expedición de la mencionada licencia de urbanismo, como quiera que dentro del expediente contentivo de las actuaciones administrativas surtidas para el otorgamiento de la misma, no aparece documento alguno que de cuenta que los interesados hayan demostrado previamente, ante la Secretaría de Obras Públicas o la entidad competente, la posibilidad de controlar el factor de riesgo y a su vez, esa entidad haya expedido la certificación preliminar de estabilidad de terrenos con la indicación de los estudios necesarios para obtener la licencia de urbanización. Luego, no era posible el desarrollo urbanístico y mal podía concederse la mencionada licencia para adelantar obras de urbanismo, "...dada la ubicación del predio zona V-AM de muy alto riesgo", máxime sin el compromiso de adelantar las obras de protección requeridas a las que alude el inciso final del artículo 3° del citado Decreto; por lo cual, tampoco era viable el desarrollo por construcción autorizado.

- **REFERIDOS A LA PROHIBICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE EL PREDIO**

Afirma el libelista, que el Decreto 657 del 25 de octubre de 1994, "Por el cual se prohíbe la prestación de servicios públicos domiciliarios y la construcción de inmuebles en zonas de alto riesgo del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", impedía de manera perentoria la construcción de inmuebles y la prestación de servicios públicos domiciliarios en predios ubicados en zonas definidas como de alto riesgo por la Oficina para Prevención y Atención de Emergencias.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

- REFERIDOS A LA PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE URBANISMO NO. CU2-98-278 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1998

Asevera también el memorialista, que la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C., autorizó la prórroga de la Licencia de Urbanismo No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, mediante Resolución No. CU2-2001-070 del 13 de Marzo de 2001, esto es, de manera extemporánea, como quiera que ya había vencido el término de vigencia inicialmente señalado en la precitada licencia, lo cual tuvo lugar el 14 de enero de 2001.

Adicionalmente, se manifiesta que la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C. no se pronunció de manera oportuna sobre la prórroga de la licencia de urbanismo solicitada por la sociedad constructora TRIADA LTDA, dentro del término señalado en el artículo 24 del Decreto Nacional 1052 de 1998, de manera que lo procedente era que los interesados solicitaran una nueva licencia y no acceder a la prórroga de la licencia inicialmente otorgada como en efecto ocurrió, evento en el cual, le era aplicable el régimen del Decreto 619 de 2000, que exigía igualmente estudios técnicos y mitigación de los riesgos de los proyectos urbanísticos en zonas de amenaza alta por remoción en masa.

- REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN NO. CU2-2002-112 DEL 10 DE MAYO DE 2002 POR LA CUAL SE CONCEDE NUEVA LICENCIA DE URBANISMO

A este respecto, el solicitante de la revocatoria directa expresó que la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C. no solamente desconoció que el predio objeto de las licencias urbanísticas otorgadas, estaba ubicado en zona de muy alto riesgo de deslizamiento, sino que no solicitó los estudios técnicos adecuados para el caso, amparándose en el tránsito de normas urbanísticas previsto en el artículo 25 del Decreto 1052 de 1998, desatendiendo los objetivos y principios señalados en la Ley 388 de 1997, los cuales hacen relación a la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes y la prevalencia del interés general sobre el particular.

- REFERIDO A LAS NORMAS SOBRE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

En relación con este aspecto, el representante del ente fiscal precisó que la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C. no tuvo en cuenta en su expedición las normas referentes a la accesibilidad de personas con movilidad reducida, en cuanto a las medidas de



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

estacionamientos y las rampas de acceso, aún cuando se trata de un proyecto implantado en alta pendiente, de conformidad con los Decretos Distritales Nos. 108 de 1985, 321 de 1992 y el Decreto Nacional No. 33 de 1998.

II. Que el 25 de abril de 2006, mediante la radicación 2-2006-17183 (folios 19 a 21 cuaderno 1) la Alcaldía Mayor de Bogotá, remitió al Departamento Administrativo de Planeación Distrital (1-2006-14319), la solicitud de revocatoria formulada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 19 de mayo de 2002 (sic) y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 14 de junio de 2000 (sic), LC-2002-2-0046 del 6 de febrero de 2002 (sic) y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

III. Que el 23 de mayo de 2006, mediante oficio con radicación 2-2006-12829 (folio 22 cuaderno 1) la entonces Gerencia de Trámites Administrativos de esta entidad, solicitó al Curador Urbano No. 2 de Bogotá D.C. encargado arq. GONZALO VARGAS AYALA, los expedientes administrativos contentivos de las actuaciones administrativas que derivaron en la expedición de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002.

IV. Que el 8 de junio de 2006, mediante Oficio No. 1-2006-19535 (folio 23 cuaderno1), el Curador Urbano No. 2 (E) de Bogotá D.C., remitió los expedientes Nos. 98-2-0945, 99-2-0047, 99-2-0557, 99-2-1145, 00-2-1108, 00-2-1109, 01-2-0263, 00-2-1378, 01-2-0508, 01-2-1198, 02-2-0461, 02-2-0601, 02-2-0676, en tres carpetas y en relación con los planos aprobados en los expedientes antes señalados aclaró que los mismos ya habían sido transferidos al archivo de esta entidad.

V. Que mediante Auto del 21 de junio de 2006, la Subdirección Jurídica del entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, inició el trámite de revocatoria directa, convocó al interesado o titular de los actos administrativos cuestionados y dispuso requerir a la Subdirección de Planeamiento Urbano, con el fin de solicitar los antecedentes y estudios existentes respecto de los mencionados actos administrativos, así como el estudio técnico del expediente, de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el solicitante.

VI. Que el 4 de julio de 2006, la Subdirección Jurídica mediante el oficio SJ 1411-2006, informó al señor ALVARO HERNAN VELEZ TRUJILLO en su calidad de representante legal de TRIADA LTDA., persona jurídica titular de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, sobre el inicio del trámite de revocatoria directa y lo convocó, para que manifestara si concedía o no el consentimiento expreso y escrito sobre la revocatoria de dichos actos.

VII. Que el 4 de julio de 2006, mediante memorando con radicación 3-2006-04070 (folio 86 cuaderno 1) la Subdirectora Jurídica encargada, solicitó al Subdirector de Planeamiento Urbano del DAPD, remitir los antecedentes y estudios existentes respecto de los actos administrativos objeto de solicitud de revocatoria, y además adelantara un estudio técnico de los expedientes que las contienen, de conformidad con lo señalado en Auto del 21 de junio de 2006.

VIII. Que el 8 de agosto de 2006, mediante la radicación 1-2006-27789 (folios 89 a 121 cuaderno 1) el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, en su calidad de apoderado de la sociedad TRIADA LTDA, según poder otorgado el 7 de junio de 2006, manifestó su oposición a *“la solicitud elevada por el Contralor Distrital para la revocatoria directa de las licencias otorgadas por la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C.*

IX. Que el 11 de agosto de 2006, mediante el oficio 1-2006-28437 (folios 122 a 127 cuaderno 1) el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, anexó copia del informe de Verificación de Obras de Mitigación No. 0160 del 26 de abril de 2006, emitido por la Subdirección de Control de Vivienda del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, para el proyecto Urbanización San Cayetano.

X. Que el 14 de agosto de 2006, mediante el oficio 1-2006-28705 (folios 128 a 141 cuaderno 1) el apoderado de la sociedad TRIADA LTDA., allegó diversos conceptos técnicos, emitidos por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, con el fin de que fueran tenidos en cuenta en el trámite de revocatoria directa.

XI. Que el 25 de septiembre de 2006 mediante el oficio 1-2006-34671 (folios 142 a 151 cuaderno 1) el doctor GONZALEZ GARAVITO, remitió el concepto No. 2006EE45860 del 4 de septiembre de 2006, proferido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, en el cual realiza un análisis respecto de la facultad de las contralorías para hacerse parte en los procedimientos administrativos y la posibilidad de interponer recursos y formular peticiones de revocatoria directa.

XII. Que el 6 de octubre de 2006, la Gerente de Trámites Administrativos de la Subsecretaría Jurídica (folio 152 cuaderno 1), reiteró a la Subdirección de Planeamiento Urbano, la solicitud de concepto técnico.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

XIII. Que el 17 de octubre de 2006, la Subdirección de Planeamiento Urbano mediante memorando con radicación No. 3-2006-06896 (folios 155 a 156 cuaderno 1), emitió concepto técnico en los siguientes términos:

"(...)revisado el mapa georreferenciado elaborado a partir de la digitalización vectorial del Mapa de zonificación geotécnica de Ingeominas y el plano digital No. CU2-RU 11/4-01, elaborado y aportado por la Contraloría de Bogotá D.C., se encontró que la Urbanización San Cayetano de la Localidad de San Cristóbal, cuenta con dos (2) zonificaciones según el Mapa de zonificación geotécnica de Ingeominas, Zonas de Riesgo II-M y V-AM.

El Decreto 657 de 1994, establece en su artículo 1°:

"Artículo 1°.-A solicitud de las entidades distritales, la Oficina para Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá, D.C., OPES, emitirá concepto técnico sobre los riesgos de tipo geológico, hidráulico o eléctrico existentes en las diferentes zonas de la ciudad.

Dicho concepto técnico será tenido en cuenta por las diferentes autoridades distritales para la expedición de los conceptos que les corresponde emitir sobre disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y para la expedición de licencias de urbanismo o de construcción. (sublíneas fuera de texto).

Según la documentación que reposa en las carpetas del expediente en estudio, y revisado el archivo del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, no se encontró solicitud de concepto a la OPES conforme a lo dispuesto en el Decreto 657 de 1994, ni trámite alguno ante esa entidad, hoy en día Dirección de Prevención y Atención de Emergencias-DPAE, por parte de la firma "TRIADA LTDA".

CONCLUSIONES:

Con los antecedentes mencionados, se puede concluir que la Urbanización San Cayetano de la Localidad de San Cristóbal cuenta con dos (2) zonificaciones según el plano elaborado por Ingeominas en 1988, "Zona de Riesgo: IIM y V-AM", esta última no tomada en consideración por el Curador Urbano al otorgar la Licencia de Urbanismo mediante Resolución No. CU2-98-278 de diciembre 14 de 1998. Sin embargo, consideramos pertinente solicitar el concepto de Riesgo de dicha urbanización a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias-DPAE, oficina competente para determinar la existencia o no de riesgo, en el Distrito Capital, según lo establecido en el Decreto 657 de 1994 y en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."



Continuación de la Resolución No. Nº 0533 07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

XIV. Que el 26 de octubre de 2006, la Subdirección Jurídica mediante el oficio 2-2006-27653 (folios 157 y 158 cuaderno 1), dirigido a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), solicitó concepto técnico de acuerdo con los argumentos expuestos por el solicitante de la revocatoria directa y se remitieran los antecedentes o estudios existentes al respecto, con el fin de determinar, si para el predio sobre el cual se expidieron las Resoluciones Nos. 98-278; 99-150; 01-070; 02-112; y las Licencias de Construcción Nos. 00-2-0086; 00-2-0046, 02-2-0241, fueron aprobados los respectivos estudios de riesgo.

XV. Que el 1º de diciembre de 2006, mediante oficio con radicación 1-2006-44583 (folios 161 a 163 cuaderno 1), la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE-, emitió concepto técnico en los siguientes términos:

"(...)

1. Con relación a los FUNDAMENTOS FACTICOS del literal C:

En la Solicitud para la Licencia de Urbanismo aprobada mediante resolución No. CU2-98-278 del 14 de Diciembre de 1998, el predio fue ubicado en zona de riesgo III-M según el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá (Convenio 200-86 DAPD-INGEOMINAS); personal técnico de ésta entidad ubicó el predio utilizando la información contenida en las licencias suministradas en la solicitud y encontró que los lotes que conforman la Urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre III-M y V-AM; por este motivo recomendamos que esta información sea validada por Ingeominas como responsable de la información contenida en el plano, suministrándole a partir de una georreferenciación exacta los datos que permitan la incorporación del predio en el mapa verificando que el origen de coordenadas sea consistente al utilizado para la elaboración del mismo.

Lo anterior es de gran importancia dado que existían condicionamientos establecidos relacionados con la ubicación del predio, enfocados a la viabilidad del desarrollo urbanístico proyectado.

2. Con relación a los FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINALES DE LA SOLICITUD DE LA CONTRALORÍA:

El predio se encuentra localizado en zona de Amenaza Alta, Media y Baja como aparece en el plano Normativo No.4 "AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA", adoptado mediante Decreto Distrital No. 190 de Junio 22 de 2004 para lo cual anexamos plano con la localización de los lotes que componen la Urbanización.

De acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente en el momento de la expedición de las licencias, no era la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE, la entidad encargada de la verificación del cumplimiento de



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

los términos de referencia para la ejecución de los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa de que trata el artículo 85 del Decreto 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá); razón por la cual no conocemos acerca de lo afirmado en el numeral 2.7.

Con respecto a lo enunciado en el numeral 2.10.1, recomendamos se revise cuidadosamente el marco normativo dentro del cual fueron otorgadas o prorrogadas las licencias de urbanismo, esto con el fin de aclarar la exigencia de los estudios detallados de amenaza y riesgos por fenómenos de remoción en masa si se tiene en cuenta lo establecido para la transición de la normatividad.

3. Con relación a las PRUEBAS ADJUNTAS A LA SOLICITUD

De acuerdo con los numerales 1.19 y 1.20, mapa georreferenciado y fotografías de zonas susceptibles; éstas no fueron enviadas a ésta entidad adjuntas al documento de la contraloría.

4. Por último, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Constructora Triada Ltda., en las reuniones conciliatorias que se han venido desarrollando en las oficinas de la Subdirección de Control de Vivienda del Dama y a las cuales ha asistido esta entidad, actualmente la DPAE, está realizando la revisión del estudio detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa "Análisis de Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa del talud oriental del Proyecto Urbanización San Cayetano en los cerros sur-orientales de Bogotá", con el fin de verificar el cumplimiento de los términos de referencia establecidos por la DPAE para la elaboración de dichos estudios; no obstante, es pertinente aclarar que tal revisión, no hace parte de ningún proceso de licenciamiento y se hace en atención a las situaciones de emergencia que se han presentado en dicho sector.

(...)"(subrayado fuera de texto)

XVI. Que el día 12 de diciembre de 2006, la Subdirección Jurídica mediante el oficio 2-2006-32238 (folio 164 cuaderno 1), solicitó al Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear "INGEOMINAS", la verificación de la información remitida por la DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS -DPAE- en su concepto técnico del 1 de diciembre de 2006. Así mismo, se solicitó el envío de los estudios realizados al respecto.

XVII. Que mediante el oficio 1-2007-00821 del 11 del enero de 2007 (folio 165 cuaderno 1), la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, informó al Subdirector de Gestión Urbanística del DAPD (Secretaría Distrital de Planeación), que por solicitud de la Alcaldía Local de Chapinero y en el marco de sus competencias, se abrió el estudio No. 282, el



Continuación de la Resolución No. No 0 5 3 3

07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

cual fue examinado por la Comisión el día 27 de diciembre de 2006, en el que expresó que revisada la totalidad de la documentación que hace parte de los expedientes, la Comisión encontró mérito para solicitar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital-DAPD, la revocatoria directa de la licencia.

XVIII. Que el 15 de enero de 2007, mediante oficio 1-2007-01082 (folios 166 y 167 cuaderno 1), el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, solicitó se le diera traslado de los estudios técnicos y de las pruebas practicadas dentro del trámite de revocatoria directa.

XIX. Que el 18 de enero de 2007, mediante el oficio 1-2007-01675 (folios 168 a 173 cuaderno 1), INGEOMINAS emitió concepto técnico, en los siguientes términos:

"(...)Se aclara que de acuerdo al documento presentado por el doctor ÓSCAR GONZÁLEZ ARANA, Contralor de Bogotá, las licencias de construcción Nos 00-2-0086 y 02-2-0241 fueron expedidas por el Curador Urbano No 2 y no por el Curador Urbano No 4 tal como se cita en la solicitud.

- Con el fin de verificar la localización de los predios involucrados en las licencias de construcción Nos 00-2-0086 y 02-2-0241 expedidas por el Curador Urbano No 2, se solicitó al Ingeniero José Luis Reyes de la DPAE, aclarar la localización de los predios involucrados en estas licencias, toda vez, que en la carta remitida por la DPAE y por la contraloría no existe referencia específica al respecto; en la carta de la DPAE solo figura una fotocopia carta con la localización de los lotes.*

- Remitida esta localización, las coordenadas dentro de las cuales se localiza el predio se encuentran dentro del polígono que presenta las siguientes coordenadas:*

NORTE: 995.540	ESTE: 996.780
NORTE: 995.790	ESTE: 996.740
NORTE: 995.830	ESTE: 997.200
NORTE: 995.660	ESTE: 997.260

Se anexa al presente documento la información remitida por la DPAE.

- Localizado este predio en el plano de "Zonificación Geotécnica de Bogotá, figura 6-37 A del convenio D.A.P.D.-INGEOMINAS 200-86, a escala 1:25.000, se puede ver dicho predio se encuentra parte en la zona V-AM y parte en la zona IIIM, las cuales se describen en la siguiente forma:*



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. ~~No 0533~~

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
V-AM	De muy alto riesgo; zona con la mayor cantidad de deslizamientos, que han sido acelerados por deficiencias en el sistema de alcantarillado existente o por falta de él. Calles destapadas y pendientes fuertes, construcción sobre rellenos y sectores de chircales.	Construcción de sistemas de alcantarillado, drenaje, reforestación, evitar la urbanización sobre rellenos o botaderos. Los estudios de suelos para estas zonas deberán llevar análisis de estabilidad
III-M	Zonas de deslizamientos y carcavamientos potenciales	El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de erosión.

En la Figura 1 se anexa un esquema de la localización del predio en el plano de Zonificación Geotécnica mencionado.

- Es de aclarar que el Mapa de Zonificación Geotécnica citado se encuentra en medio análogo y que la digitalización y conversión a formato digital para obtener el Mapa Georeferenciado no fue responsabilidad del Instituto y que ningún funcionario participó en esta labor. El mapa inicial hace parte del estudio "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ, Convenio 200-86 entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ - DAPD y el INGEOMINAS de Octubre de 1988; los objetivos principales del estudio fueron elaborar la cartografía para ingeniería a escala 1:25.000 de la zona sur-oriental de la Sabana de Bogotá, elaborar un mapa de zonificación geotécnica detallada para los sectores críticos o prioritarios.
- El mapa de zonificación geotécnica tiene base topográfica tomada del SADEC y del IGAC, con origen Bogotá.
- Efectuadas estas precisiones se puede concluir que tal como lo especifica el doctor RAÚL NAVARRO MEJÍA en su comunicación RAD DPAAE - FOPAE 1 - 2006 - 1 - 11357, "los lotes que conforman la Urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre III-M y V-AM", de acuerdo al mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá, el cual ya se especificó, y que para las fechas de solicitud de las licencias de construcción era vigente (anterior al Plano Normativo No4 "Amenaza por Remoción en Masa" adoptado mediante Decreto Distrital No. 190 de Junio 22 de 2004)

De acuerdo con la carta referenciada se indica que la Constructora Triada Ltda., ha entregado a la Subdirección de Vivienda del DAMA un informe denominado "Análisis de Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa del talud Oriental del



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Proyecto Urbanización San Cayetano en los cerros sur - orientales de Bogotá"; sin embargo, de acuerdo a lo indicado, este informe no hace parte de ningún proceso de licenciamiento y la revisión por parte del DPAE se hace en atención a las situaciones de emergencia que se han presentado en dicho sector.

Aclarado lo anterior solicitamos comedidamente la verificación de las coordenadas de los predios objetos de las licencias de construcción, con el fin de compararlas con las entregadas a nosotros por la DPAE; si dichas coordenadas son diferentes solicitamos remitir nuevamente dichas coordenadas con el fin de verificar nuevamente su localización o un plano topográfico en el cual se localizan los predios objeto de las resoluciones. (...)

XIX. Que el 25 de enero de 2007, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- (actualmente Secretaría Distrital de Ambiente), mediante oficio No. 2-2007-2705 radicación SDP 1-2007-02927 (folios 174 a 241 cuaderno 2), realizó las siguientes precisiones sobre las actuaciones adelantadas en el predio en el que se ubica la urbanización San Cayetano:

"(...)

La inspección, vigilancia y control de la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda en el Distrito Capital de Bogotá, fue asignada al Departamento Técnico del Medio Ambiente- DAMA, por Decreto Distrital 329 del 30 de septiembre de 2003, funciones que ejerce, a través de la entonces Subdirección de Control de Vivienda, antes denominada Subsecretaría de Control de Vivienda de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y hoy Dirección Distrital de Inspección Decreto 571 de 2006, control y vigilancia, la actividad de enajenación de cinco o mas inmuebles destinados a vivienda, de conformidad con lo ordenado en el Art. 313 numeral 7 de la Constitución Nacional, Art. 12 numeral 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo Distrital 16 de 1997, Ley 66 de 1968, Decreto Ley 2610 de 1979, Decreto Ley 078 de 1987, Decreto Nacional 405 de 1994, Decreto Distrital 540 de 1991 y Decreto Distrital 330 de 2003.

En ejercicio de estas funciones se avocó conocimiento de la queja presentada ante esta dependencia a la cual se procederá a hacer referencia de manera sucinta con el fin de enterarlo sobre la actuación de la Subdirección frente a los hechos denunciados, de acuerdo con la información que reposa en los archivos.

Con radicación No. 1-2004-64802 E del 10 de noviembre de 2004, los señores SALVADOR FORERO ESPITIA y LUIS ALEJANDRO PINEDA PULIDO, en representación de la comunidad de la Urbanización San Cayetano interpusieron queja por cuanto la sociedad TRIADA LTDA, no ha realizado las acciones tendientes a mitigar el riesgo que se presenta en el talud, por lo que la Gerencia de Investigaciones de la entonces Subdirección de Control de Vivienda ordenó la apertura investigación administrativa mediante auto No. 686 del 23 de febrero de 2005 (anexo) ; dentro del trámite de la investigación se aportaron cada uno de los estudios de las visitas técnicas



Continuación de la Resolución No. Nº 0533

07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

realizadas tanto por la DPAE, como por la Gerencia de Prevención de la Subdirección de Control de Vivienda, los cuales se relacionan a continuación:

- Diagnostico de Emergencia No. DI.1904 de fecha 23 de noviembre de 2003 de la DPAE.
- Diagnostico de Emergencia DI450 de fecha 26 de abril de 2002 de la DPAE.
- Informe de Visita Técnica de fecha 24 de agosto de 2004 de la Gerencia de Prevención.
- Informe de visita Técnica de fecha 24 de **noviembre** de 2004 de la Gerencia de prevención.
- Concepto RO-12756 de fecha 13 de diciembre de 2004, de la DPAE.
- Informe de Visita Técnica de fecha 29 de agosto de 2005 de la Gerencia de Prevención.
- Aclaración concepto de la Gerencia de prevención de fecha 5 de septiembre de 2005.
- Concepto RO-16355 de fecha 18 de noviembre de 2005, de la DPAE
- Concepto RO-15020 de fecha 12 de julio de 2005, de la DPAE
- Concepto RO-16458 de fecha 23 de enero de 2006, de la DPAE
- Informe de verificación de obras de mitigación No. 0148 de fecha 9 de diciembre de 2005 de la Gerencia de Prevención

Así mismo en desarrollo de la investigación y de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 540 de 1991 en su artículo 18 se cito a diligencia de conciliación a los interesados con el objeto de establecer acuerdos y soluciones a las situaciones origen de la queja y señalar plazos para el cumplimiento de las mismas, en consecuencia se cito a varias diligencias toda vez que por solicitud de las partes se hizo necesario realizar suspensión de la diligencia, por lo tanto en aras que se tenga conocimiento de los acuerdos celebrados me permito anexar copia de cada una de las actas suscritas así:

- Acta de fecha 14 octubre de 2005
- Acta de fecha 16 de marzo de 2006
- Acta de fecha 19 de abril de 2006
- Acta de fecha 2 de junio de 2006
- Acta de fecha 15 de junio de 2006 (última) En la cual participaron invitados de la DPAE

Actualmente se encuentra haciendo seguimiento al acuerdo celebrado en la ultima (sic) diligencia de conciliación, tal y como lo informo la DPAE en el oficio RO 20275 de radicado 2006EE8022 del 23 de noviembre de 2006.(...)"



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. Nº 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

XX. Que el día 22 de febrero de 2007, mediante los oficios 2-2007-05158 y 2-2007-05160 (folios 242 y 244 cuaderno 2), la Dirección de Trámites Administrativos de la Subsecretaría Jurídica, dio traslado a la sociedad TRIADA LTDA y a su apoderado, el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, de los siguientes conceptos técnicos:

1. Memorando con radicación 3-2006-06896, expedido el 17 de octubre de 2006 por la Subdirección de Planeamiento Urbano. (2 folios).
2. Oficio No. RO 20273 y radicación DAPD 1-2006-44583, del 1 de diciembre de 2006, expedido por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE (3 folios).
3. Oficio No. DIR-0019 y radicación DAPD 1-2007-01675, expedido por el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS (6 folios).

XXI. Que el 5 de marzo de 2007, mediante comunicación con radicación 1-2007-08668 (folios 246 a 248 cuaderno 2), el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, se pronunció respecto de los conceptos técnicos señalados en precedencia, en los siguientes términos:

"(...)

Asegura el Contralor Distrital en su solicitud de Revocatoria Directa que según el mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá elaborado por Ingeominas, el predio objeto de revocatoria directa se encuentra en zona V - AM, de muy alto riesgo; afirmación que queda totalmente desvirtuada cuando es el propio Instituto Colombiano de Geología y Minería concluye en el Oficio No. DIR-0019 con radicación DAPD 1-2007-01675:

"Efectuadas estas precisiones se puede concluir que los lotes que conforman la urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre III - M y V - AM", de acuerdo al mapa de zonificación geotécnica de Bogotá y que para las fechas de solicitud de las licencias de construcción era vigente; razón por la cual no se puede concluir que el Predio denominado San Cayetano este ubicado en zona V-AM de muy alto riesgo."

Por otra parte es importante resaltar que el Instituto Colombiano de Geología y Minería reitera lo dicho en la intervención al trámite de Revocatoria en el sentido que no es posible identificar la localización exacta de la urbanización San Cayetano, cuando señala lo siguiente: "solicitamos comedidamente la verificación de las coordenadas de los predios objeto de las licencias de Construcción, con el fin de compararlas con



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

las entregadas a nosotros por la DPAAE; si dichas coordenadas son diferentes solicitamos remitir nuevamente dichas coordenadas con el fin de verificar nuevamente su localización" La anterior afirmación denota que aún hoy en día no existe plena certeza sobre la ubicación de los predios.

*Por su parte la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias en el oficio 2006EE8022 señala: "personal técnico de esta entidad ubicó el predio utilizando la información contenida en las licencias suministradas en la solicitud y encontró que los lotes que conforman la Urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre IIIM y V - AM, por esta razón solicitamos que esta información sea validada por Ingeominas"; frente a esta manifestación se deduce la imposibilidad para ubicar el predio de manera precisa, razón por la cual fue la autoridad competente **CURADOR URBANO No 2**, quien en su momento y mediante los procedimientos correspondientes determinó la localización del predio, estableciendo que éste se encontraba en zona de riesgo IIIM, de conformidad con el mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá.*

Así mismo, la Subdirección de Planeamiento Urbano conceptuó en el sentido que la Urbanización San Cayetano cuenta con dos zonificaciones según el plano elaborado por Ingeominas, Zona de Riesgo III - M y V - AM, así:

"(...) revisado el mapa de Zonificación geotécnica de Ingeominas y el plano digital No. CU2-RU 11/4-01, elaborado y aportado por la Contraloría de Bogotá D.C, se encontró que la Urbanización San Cayetano de la Localidad de San Cristóbal, cuenta con dos (2) zonificaciones según el Mapa de zonificación geotécnica de Ingeominas, Zonas de Riesgo III-M y V-AM."

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones es evidente que tal y como se expresó en la intervención dentro del trámite de revocatoria directa, no es posible determinar de manera exacta la ubicación del predio San Cayetano, en razón a las características del plano de zonificación geotécnica, razón por la cual resulta violatorio de los principios constitucionales de la buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, solicitar la revocatoria directa de un acto administrativo a partir de supuestos; esto es, sin saber de manera exacta la ubicación del predio San Cayetano y por consiguiente tratándole de aplicar un tratamiento y una normatividad diferente a la que le corresponde.

Así las cosas, se puede concluir que el Contralor Distrital de Bogotá sin ninguna clase de fundamentación y de manera arbitraria pretende desconocer la presunción de legalidad que rige todas las actuaciones administrativas, pues se reitera que mi representada acudió a la autoridad competente para que definiera la ubicación de su



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

predio, quien determinó que se encontraba localizado en zona de riesgo IIIM- Zona de Riesgo Medio, de conformidad con el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá, obteniendo las Licencias Urbanísticas y de Construcción con base en las normas urbanísticas vigentes; cumpliendo además con las obligaciones señaladas y ejecutando las obras propuestas con base en el estudio de suelos, a fin de mitigar el riesgo por fenómenos de remoción en masa.

Finalmente y de manera respetuosa solicitó nuevamente a la Secretaria Distrital de Planeación, desestimar la solicitud de Revocatoria Directa presentada por el Contralor Distrital de Bogotá, pues del análisis de los conceptos técnicos aportados a su despacho se colige que es imposible determinar la ubicación exacta del predio.

(...)"

XXII. Que el 14 de junio de 2007, mediante comunicación con radicación 1-2007-24143 (folios 249 a 257 cuaderno 2), el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, presentó argumentos adicionales reiterando la oposición a la solicitud de Revocatoria Directa de los referidos actos administrativos, así:

"(...)en cuanto a la afirmación efectuada por el señor Contralor Distrital, quien expresó que conforme al Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá, elaborado por INGEOMINAS con ocasión del Convenio No 200-86 suscrito con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD, el predio en el que se desarrolló la Urbanización San Cayetano se encuentra en zona V-AM de muy alto riesgo y no en la zona III M de riesgo medio como lo contempló en su momento la Curaduría Urbana No 2, me permito manifestar que la misma no es cierta, ya que si se analiza a fondo el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá, el cual fue elaborado a escala 1:25000, no se logra concluir con la contundencia que pretende el renombrado funcionario tal situación.

Tal y como ya lo enuncié se trata de un plano elaborado a escala 1:25.000, circunstancia que sumada a la antigüedad del mismo no permite identificar o aproximar con claridad la Urbanización San Cayetano, aún más teniendo en cuenta que las coordenadas utilizadas en el mismo no se ajustan a las establecidas en los planos topográficos y urbanísticos aprobados e incorporados en las planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ni del DAPD.

Reafirmando lo anterior, se debe tener en cuenta que el Instituto Colombiano de Geología y Minería concluyó en el Oficio No. DIR-0019 con radicación DAPD 1-2007-01675 que:



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

"Efectuadas estas precisiones se puede concluir que "los lotes que conforman la urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre III-M y V-AM", de acuerdo al mapa de zonificación geotécnica de Bogotá y que para las fechas de solicitud de las licencias de construcción era vigente; razón por la cual no se puede concluir que Predio denominado San Cayetano esté ubicado en zona V-AM de muy alto riesgo."

Por otra parte, es importante tener en cuenta el concepto técnico emitido por el Instituto Colombiano de Geología y Minería que reitera la tesis de la imposibilidad de identificar la localización exacta de la Urbanización San Cayetano, especialmente cuando señala que: "solicitamos comedidamente la verificación de las coordenadas de los predios objeto de las licencias de Construcción, con el fin de compararlas con las entregadas a nosotros por la DPAE; si dichas coordenadas son diferentes solicitamos remitir nuevamente dichas coordenadas con el fin de verificar nuevamente su localización".

De otro lado, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias en el oficio 2006EE8022 señala sobre el particular lo siguiente: "personal técnico de esta entidad ubicó el predio utilizando la información contenida en las licencias suministradas en la solicitud y encontró que los lotes que conforman la Urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre IIIM y V-AM, por esta razón solicitamos que esta información sea validada por Ingeomínas.", manifestación que confirma la imposibilidad para ubicar el predio de manera precisa.

Así mismo, se debe hacer mención que la Subdirección de Planeamiento Urbano conceptuó en el sentido que la Urbanización San Cayetano cuenta con dos zonificaciones según el plano elaborado por Ingeomínas, Zona de Riesgo III-M y V-AM, así:

"(...) revisado el mapa de Zonificación geotécnica de Ingeomínas y el plano digital No CU2-RU 11/4-01, elaborado y aportado por la Contraloría de Bogotá D.C., se encontró que la Urbanización San Cayetano de la Localidad de San Cristóbal, cuenta con dos (2) zonificaciones según el Mapa de zonificación geotécnica de Ingeomínas, Zonas de Riesgo III-M y V-AM".

Conforme a todo lo anterior, se puede verificar que existe una imposibilidad general por determinar la ubicación del predio objeto de la presente discusión; sin embargo, en el momento de la expedición de las respectivas Licencias de Urbanismo y Construcción, la Curaduría Urbana No 2 dando cumplimiento a la función pública



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. Nº 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

que ejerce, determinó que el predio se encontraba localizado en una zona de riesgo III-M, hecho que no establece que los actos administrativos que injustificadamente se pretenden sean revocados estén inmersos en algunas de las causales establecidas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

Otra de las erradas aseveraciones efectuadas por el señor Contralor Distrital de Bogotá D.C., fue la de indicar que la sociedad TRIADA LTDA., no cumplió con las obligaciones de ejecutar las obras de mitigación propuestas en el estudio de suelos, a fin de reducir el riesgo por fenómenos de remoción en masa; ya que como se dejó claramente explicado dentro del presente proceso, mis representados cumplieron a cabalidad con cada uno de los puntos propuestos en el estudio de suelos efectuado por la sociedad ÁREAS LTDA.

No obstante lo anterior, demostrando su buena fe y responsabilidad ante los hechos, y yendo más allá de las obligaciones urbanísticas que estaban a su cargo, la sociedad TRIADA LTDA., asistió el pasado 15 de junio de 2006 a una audiencia de conciliación ante la Subdirección de Control de Vivienda del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, dentro de la investigación administrativa iniciada como consecuencia de la queja presentada los residentes de la Urbanización San Cayetano en su contra, en la cual se pactó que TRIADA Ltda., presentaría un estudio a la Dirección de Prevención de Atención de Emergencias - DPAE-.

Dicho estudio fue realizado por la firma Espinosa & Restrepo y presentado a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE- el pasado 1º de septiembre de 2006 para su revisión; no obstante, el día 22 de septiembre del mismo año se informó a la renombrada Dirección que en razón a la temporada de invierno que se presentaba en el país en el último trimestre del año pasado, se iniciarían los trabajos allí recomendados a fin de incrementar los factores de seguridad del predio en cuestión.

A pesar de la buena fe, responsabilidad y compromiso por parte de la sociedad que represento en poder solucionar el problema del talud que se presenta en el renombrado predio, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DPAE- emitió el concepto técnico CT-4506 de 2006, en el cual se concluyó que el estudio presentado por la sociedad TRIADA LTDA., no se ajustaba en su totalidad a los términos de referencia dictaminados por esta entidad. En virtud de ello y reiterando su compromiso con la comunidad, TRIADA LTDA., presentó el 16 de marzo de 2007 a la DPAE el nuevo estudio solicitado, al cual dicha entidad



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

contestó con el concepto técnico CT-4777 del 26 de abril de 2007 y que en la actualidad se está cumpliendo por parte de mis poderdantes.

De esta manera, el argumento señalado por el señor Contralor Distrital para solicitar la revocatoria directa de las licencias de urbanismo y construcción de la Urbanización San Cayetano carece de total asidero jurídico y legal, por cuanto es evidente que en todo momento se ha cumplido tanto con las recomendaciones estipuladas en el estudio de suelos, como con el acuerdo conciliatorio del 15 de junio de 2006.

Ya en cuanto a los otros puntos a los que hace referencia el señor Contralor Distrital, reitero lo argumentado en el documento de fecha 8 de agosto de 2006, mediante el cual manifesté la voluntad de la sociedad TRIADA LTDA., de no otorgar el consentimiento para la revocatoria directa de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, LC-2000-2-0086 del 14 de junio de 2000, LC-2000-2-0086 del 24 de julio de 2001, LC-2002-2-0046 del 6 de febrero de 2002 y LC-2002-2-0241 del 26 de junio de 2002 expedidas por la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que en el presente caso no nos encontramos frente a ninguna de las dos situaciones instituidas en el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo para que se pueda revocar un acto administrativo sin que sea indispensable la autorización del particular al que se le ha creado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho, y que además los mismos no se obtuvieron de manera ilícita, es decir con error, fuerza o dolo, o que se expidieron en contra del interés público o social, reafirmo que los argumentos de revocatoria directa planteados por el Contralor Distrital son improcedentes.

(...)"

XXIII. Que en el Diario La República de fecha 23 de octubre de 2007, la Secretaría Distrital de Planeación efectuó publicación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Código Contencioso Administrativo, en la que se informó a aquellos terceros que pudiesen estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, sobre la iniciación y trámite de la solicitud de revocatoria directa presentada por la CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C., de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo



Continuación de la Resolución No. No 0 5 3 3 07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

XXIV. Que mediante los oficios de radicaciones SDP Nos. 1-2007-53237 y 1-2007-53574 (folios 260 a 265 cuaderno 2), del 4 de diciembre y el 8 de diciembre respectivamente, INGEOMINAS emitió un nuevo concepto, en los siguientes términos:

"(...) En respuesta al oficio de la referencia y como complementación al oficio 1-2007-01675 enviado el 16 de Enero de 2007, nos permitimos aclarar la localización del predio solicitado en el plano 6-37 A del estudio de "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ" realizada por INGEOMINAS y entregado en Octubre de 2006. La localización se hace con base en las siguientes coordenadas, las mismas que remiten ustedes en el oficio de la referencia:

562PUNTO	NORTE	ESTE
1	95799.02	96714.83
2	95844.64	97165.15
3	95674.80	97234.60
4	95650.79	96747.88

Al encontrarse las coordenadas suministradas en coordenadas con origen Bogotá E 100.000 N 100.000, fue necesaria la re proyección de las mismas a origen Bogotá E 1'000.000 N 1'000.000, para que coincidieran con la cartografía de INGEOMINAS esto fue posible gracias al aplicativo suministrado por el IGAC en su página web, Magna Sirgas Pro V 2.0, el cual permite hacer dicha transformación de coordenadas. El resultado de la re proyección fue la siguiente:

Suministradas		Proyectadas	
E	N	X	Y
96714.83	95799.02	996711.76	995804.05
97165.15	95844.64	997161.91	995849.61
97234.60	95674.80	997231.31	995679.83
96747.88	95650.79	996744.79	995655.88

De acuerdo a estas coordenadas y tal como se observa en la Figura 1, el área total de interés es de 76223.1 m2 de las cuales 26488.35 m2 correspondientes al



Continuación de la Resolución No. No 0 5 3 3 07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

34.75% se encuentran en la zona III-M, y 49734.84 m² correspondientes al 65.24% pertenecen a V-AM las cuales se describen en la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
V-AM	De muy alto riesgo; zona con la mayor cantidad de deslizamientos, que han sido acelerados por deficiencias en el sistema de alcantarillado existente (sic) por falta de él. Calles destapadas (sic) y pendientes (sic) fuertes (sic), construcción sobre rellenos y sectores de chircales.	Construcción de sistemas de alcantarillado, drenaje, reforestación, evitar la urbanización sobre rellenos o botaderos. Los estudios de suelos para estas zonas deberán llevar análisis de estabilidad.
III-M	Zonas de deslizamientos y cárcavamientos potenciales.	El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de erosión.

Se aclara que la escala del mapa en el cual se ubica el predio es 1:25.000. El informe de "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ", así como el mapa de zonificación a que se hace referencia, es decir la Figura 6-37 A, pueden ser solicitados en la biblioteca de INGEOMINAS, mediante la referencia I - 2081.(...)"

XXV. Que el día 10 de diciembre de 2007, mediante los oficios Nos. 2-2007-39459 y 2-2007-39461 (folios 267 y 268 cuaderno 2), la Dirección de Trámites Administrativos dio traslado a los señores de TRIADA LTDA y a su apoderado el doctor JUAN MANUEL GONZÁLEZ GARAVITO, del concepto técnico emitido por INGEOMINAS, el 8 de diciembre de 2007.

XXVI. Que el 13 de diciembre de 2007, mediante escrito con radicación No. 1-2007-54724 (folios 269 a 271 cuaderno 2), el doctor JUAN MANUEL GONZALEZ GARAVITO, en su calidad de apoderado de la sociedad TRIADA LTDA, presentó las siguientes observaciones al concepto técnico emitido por INGEOMINAS el 8 de diciembre de 2007:

"(...) 1. El plano adjunto al Oficio de INGEOMINAS, sobre el cual se efectúa la localización del predio, es el plano 6 - 37 A del estudio de "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ" y que como se señala en el oficio, fue efectuado en Octubre de 2006 es decir, 8 años después de haberse expedido las licencias y que por obvias razones no podía ser consultado en aquella época.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

A pesar de ello, el plano urbanístico aprobado por la licencia de construcción, coincide casi en su totalidad con las nuevas coordenadas proyectadas por el INGEOMINAS, lo que indica nuevamente que no existía precisión cartográfica absoluta para ubicar el predio, que como se ha visto, se encontraba ubicado, parte en IIIM y parte en V AM.

2. En la época de otorgamiento de las referidas licencias de urbanismo, no existían las condiciones de riesgo por remoción en masa establecidas por el POT, toda vez que éste no había sido expedido (año de 1998.) Dichas condiciones son la amenaza por remoción en masa alta, media y baja y cuyas condiciones no coinciden con las diferentes clasificaciones de la zonificación geotécnica del Ingeominas. Lo anterior, quiere indicar que las condiciones de la zona determinada como V AM por el INGEOMINAS no son las mismas de las áreas por remoción en masa con riesgo alto del POT, como erróneamente ha afirmado la DPAE dentro del presente trámite.

3. De cualquier manera tanto en la ejecución de la licencia de urbanismo como en la ejecución de las licencias de construcción, se ha cumplido a cabalidad con las condiciones establecidas en la licencia de urbanismo y en el estudio de suelos (geotécnico) efectuado por la firma ÁREAS Ltda. que en ningún caso señalan una prohibición expresa de construir. Las recomendaciones para los predios que se encuentran dentro del área clasificada como V-AM son: "Construcción de sistemas de alcantarillado, drenaje, reforestación, evitar la urbanización sobre rellenos o botaderos. Los estudios de suelos para estas zonas deberán llevar análisis de estabilidad."

De nuevo, resulta importante recordar que las licencias urbanísticas que pretende el señor Contralor Distrital sean revocadas, son actos administrativos que ya surtieron sus efectos y términos de vigencia, de tal suerte que dejaron de producir efectos jurídicos, es decir que perdieron su fuerza ejecutoria; evento que reafirma la improcedencia de la revocatoria, por cuanto son actos administrativos que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico y que por tal razón, no producen ningún efecto, de tal forma que no existen, ni tienen la posibilidad real de producir daño al ordenamiento jurídico nacional o distrital, al orden público y social o a una persona en particular.(...)"

XXVII. Que el 14 de diciembre de 2007, mediante memorando con radicación No. 3-2007-09859 (folios 272 a 276 cuaderno 2), la Subsecretaría de Planeación Territorial complementó el concepto emitido el 17 de octubre de 2006, en los siguientes términos:

"(...) CONCEPTO NORMATIVO

Con respecto a la accesibilidad de personas con movilidad reducida, las normas vigentes al momento de la solicitud de las Licencias de Construcción enunciadas en el asunto, eran las siguientes:



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

- Resolución No. 14861 de octubre 4 de 1985 "Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos", en sus artículos 29 y 30, establece:

- El Decreto 0108 de 1985 "Por el cual se establecen normas urbanísticas, arquitectónicas y de construcción y se precisan responsabilidades institucionales tendientes a que la ciudad de Bogotá sea accesible a las necesidades de los minusválidos y de los sectores de la población de movilidad reducida".

- El Decreto 321 de 1992, en el parágrafo 1 del artículo 8, dice:

"Estacionamientos para Minusválidos. La dimensión mínima es de 4.50 mts X 3.80 mts. Todo proyecto debe plantear un (1) cupo por cada 30 cupos exigidos en cualquiera de los usos".

- La ley 400 de 1997, "Por la cual se adoptan las normas sobre construcciones sismo resistentes", en el Parágrafo del artículo 7, dispone:

"PARAGRAFO. Todos los planos arquitectónicos y estructurales deben contemplar las normas sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas discapacitadas y de tercera edad".

- Finalmente el Decreto Nacional 33 de 1998, "Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-98", prevé lo siguiente:

"Toda obra deberá proyectar y construir de tal forma que facilite el acceso y evacuación de personas con movilidad reducida, sea temporal o permanente. Así mismo se debe procurar evitar toda clase de barrera física en el diseño de las vías en la construcción o restauración de edificios de propiedad pública o privada".

CONCLUSIONES:

Realizado el análisis de los planos se observó que no se señala ningún tipo de rampa que permita el desplazamiento y acceso a personas con movilidad reducida en las áreas de uso comunal, ni a las diferentes etapas de la urbanización, teniendo en cuenta que se trata de terreno inclinado y que los cambios de nivel planteados en los senderos se realizan únicamente mediante escaleras, lo cual impide la circulación a personas con movilidad reducida.

De igual manera, se encontró que en el plano U-1.01.01 "Localización General Cuadro de áreas", de la licencia de construcción No. 2002-2-086 de febrero de 2002 se señalan 4 cupos de estacionamientos para personas con movilidad reducida, que no cuentan con las dimensiones mínimas requeridas por la norma (4.50 mts X 3.80 mts).

Con lo anterior, se puede concluir que las Licencias de Construcción Nos. 2000-2-0086, 2002-2-0046 y 02-2-0241 expedidas por el Curador Urbano No. 2, para la



No 0 5 3 3 07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Urbanización San Cayetano, no cumplen con las norma exigidas, en lo referente a los estacionamientos y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

De otra parte, vale la pena aclarar que para el análisis presentado por la Subdirección de Planeamiento Urbano (hoy Subsecretaría de Planeación Territorial) mediante el oficio 3-2006-06896, se tomó como base para la ubicación del predio, las siguientes coordenadas de acuerdo con el archivo digital del plano urbanístico, anexo por la Contraloría de Bogotá:

ESTE 96714.83	NORTE 95799.02
ESTE 97165.15	NORTE 95844.64
ESTE 97234.60	NORTE 95674.80
ESTE 96747.88	NORTE 95650.79

(...)"

XXVIII. Que el 28 de diciembre de 2007, mediante escrito con radicación 1-2007-56258 (folios 277 a 281 cuaderno 2), el doctor JUAN MANUEL GONZALEZ GARAVITO, en su calidad de apoderado de la sociedad TRIADA LTDA, objetó el concepto técnico emitido por la Subsecretaría de Planeación Territorial, así:

"(...)

1. Tal y como ya se ha manifestado dentro del presente trámite de Revocatoria Directa, la sociedad Triada Ltda., radicó ante la Curaduría Urbana No. 2 el día 7 de Septiembre de 1998, y bajo el número 98-02-0945, la solicitud de licencia de urbanización para el predio denominado San Cayetano.
2. Por medio de la Resolución CU2-98-278 del 14 de Diciembre de 1998, la Curaduría Urbana número 2 concedió la Licencia de urbanismo para la totalidad del predio denominado San Cayetano, por el término de veinticuatro (24) meses y con vigencia a partir del día 15 de enero de 1999.
3. Posteriormente, y en razón a la solicitud presentada por parte de la citada sociedad a la Curaduría Urbana No. 2, ésta última, el día 17 de Mayo de 2000 concedió la Licencia de Construcción número 2000-2-0086, para los superlotes 3 y 4 de la Etapa 1 de la Urbanización San Cayetano.
4. Mediante la Resolución CU2-2000-1210 del 29 de Diciembre de 2000, la Curaduría Urbana No. 2 aprobó la modificación de la Licencia de Construcción 2000-2-0086 expedida el 17 de Mayo de 2000, consistente en la aclaración del área total construida en el cuadro general de áreas y en el otorgamiento del visto bueno al proyecto de división y a los planos de alinderamiento de la Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial San



Continuación de la Resolución No. No 0 5 3 3 07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Cayetano I.

5. El día 6 de Febrero de 2002, la Curaduría Urbana No. 2 otorgó Licencia de Construcción número 2002-2-0246, para el superlote número 2 de la Etapa 3 de la Urbanización San Cayetano.
6. A través de la Resolución CU2-2002-112 del 10 de Mayo de 2002, la renombrada Curaduría Urbana No. 2, expidió la Licencia de Construcción número 2002-2-0241, para el superlote número 2 de la Etapa 4 de la Urbanización San Cayetano.

Así entonces, no queda duda alguna, que contrario a lo que manifiesta la Subsecretaría de Planeación Territorial, al momento de la solicitud y posterior expedición de las Licencias de Construcción 00-2-0086, 00-2-0046 y 02-2-0241, la norma reguladora de los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones físicas era la Ley 361 de 1997, y no la Resolución No. 14861 del 4 de Octubre de 1985, el Decreto Distrital 0108 de 1985, el Decreto 321 de 1992, el Decreto Nacional 33 de 1998, y la Ley 400 de 1997.

Siendo claro lo anterior, no puede olvidarse que la ley vigente al momento de la solicitud y expedición de las correspondientes licencias de construcción destacó una serie de obligaciones generales respecto de la eliminación de barreras arquitectónicas que a la fecha de radicación de la solicitud de la licencia de urbanización, es decir el día 7 de Septiembre de 1998, no se encontraban reglamentadas, y que en consecuencia no podían haber sido tenidas en cuenta ni por la Curaduría Urbana No. 2, ni por la sociedad Triada Ltda., para la expedición y ejecución respectiva de las licencias.

Reiterando tal argumento, cabe destacar que el artículo 47 de la citada Ley 361 de 1997 estableció que....

(...)

Así entonces, no puede olvidarse que en Colombia las leyes rigen así (sic) al futuro y a partir del momento exacto de su promulgación, y así lo ha dejado en claro el Código de Régimen Político y Municipal en sus artículo 52 a 56, subrogatorios de los artículos 11 y 12 del Código Civil, en donde se manifestó que:

(...)



No 0 5 3 3

07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

En consecuencia, y como solo hasta el año 2005 y mediante el Decreto 1538 el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 361 de 1997, no era legalmente posible que la Curaduría Urbana No. 2 hubiese establecido una serie de obligaciones sobre dicho tema a las que debía someterse el desarrollo y construcción de la Urbanización San Cayetano; por lo tanto, el argumento expuesto por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, resulta plenamente contrario a la realidad jurídica y urbanística de la Urbanización, toda vez que las licencias otorgadas a la sociedad que represento cumplan a cabalidad con las normas vigentes al momento de su expedición, entre ellas la renombrada Ley 361 de 1997, que como ya se dejó en claro no se encontraba plenamente reglamentada.

Adicional a lo anterior, no puede dejarse de lado que el artículo 49 de la Ley 361 de 1997 estableció que:

(...)

De otro lado y a fin de demostrar la legitimidad y legalidad de las licencias de construcción otorgadas a la sociedad Triada Ltda., para el desarrollo del proyecto urbanístico San Cayetano, resulta importante recordar que las licencias urbanísticas que pretende el señor Contralor Distrital sean revocadas, son actos administrativos que ya surtieron sus efectos y términos de vigencia, de tal suerte que dejaron de producir efectos jurídicos, es decir que perdieron su fuerza ejecutoria; evento que reafirma la improcedencia de la revocatoria, por cuanto son actos administrativos que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico y que por tal razón, no producen ningún efecto, de tal forma que no existen, ni tienen la posibilidad real de producir daño al ordenamiento jurídico nacional o distrital, al orden público y social o a una persona en particular.

De esta manera, es claro que las Licencias Urbanísticas, expedidas por los Curadores Urbanos o las entidades municipales competentes, son actos administrativos expedidos bajo unos parámetros claros establecidos, que para el presente caso es el Decreto 1052 de 1998, razón por la cual, tiene una vigencia previamente establecida. En este orden de ideas y sin excepción, los Curadores Urbanos únicamente pueden expedir Licencias Urbanísticas con una vigencia máxima de 24 meses, prorrogables por 12 meses más, término que una vez vencido, genera la pérdida de fuerza ejecutoria de la Licencia, y en este sentido, el acto administrativo deja de producir efectos jurídicos. (...)



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

XXIX. Que el 18 de febrero de 2008 con radicación 1-2008-06718 (folios 283 a 329 cuaderno 2), el apoderado de la sociedad TRIADA LTDA, reiteró su oposición a la revocatoria directa de los mencionados actos administrativos, presentó argumentos adicionales y anexó la Resolución No. 0649 del 11 de diciembre de 2007 por medio de la cual la Secretaría Distrital de Hábitat cerró la investigación administrativa contra la sociedad TRIADA LTDA; así mismo allegó el concepto técnico No. 5107 del 28 de diciembre de 2007 de la DPAE, en el cual se concluye que el estudio "ANÁLISIS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA DEL TALUD ORIENTAL DEL PROYECTO URBANIZACIÓN SAN CAYETANO UBICADO EN LOS CERROS SUR ORIENTALES DE BOGOTÁ", cumple con los términos de referencia establecidos por la DPAE para la elaboración de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa.

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

Conforme a las anteriores consideraciones, este Despacho entrará a decidir la revocatoria directa presentada contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

1. EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

1.1 Competencia de la SDP para avocar y decidir el trámite de revocatoria directa de actos administrativos mediante los cuales los Curadores Urbanos otorgan o niegan licencias urbanísticas.

El parágrafo 1 del artículo 37 del Decreto Nacional 564 de 2006, radica en cabeza de los curadores urbanos o de los alcaldes municipales o distritales o sus delegados, la decisión de fondo de los trámites de revocatoria directa de los actos administrativos que otorguen o nieguen licencias urbanísticas así:

"(...)

Artículo 37. De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1º. Contra los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos otorguen o nieguen licencias urbanísticas, procede la



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

revocatoria directa ante el mismo curador o ante el alcalde municipal o distrital o su delegado, en los términos previstos en el Título V de la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo.

(...)"

La competencia en cuestión, en el Distrito Capital, fue asignada a esta Entidad, mediante el Decreto Distrital 191 de 2006, norma que en sus artículos 1 y 2, dispone:

"(...)

Artículo 1- De la Revocatoria Directa a solicitud de parte. Asignar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital D.A.P.D., la función de conocer, tramitar y resolver las solicitudes de revocatoria directa, de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá D.C. otorguen o nieguen licencias urbanísticas.

(...)

Artículo 2- De la Revocatoria Directa de oficio. Asignar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital D.A.P.D., la competencia para conocer, tramitar y resolver de oficio la revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá D.C. otorguen o nieguen licencias urbanísticas.

(...)" (negrilla u subrayado fuera de texto)

1.2. Legitimidad para solicitar la revocatoria directa de actos administrativos mediante los que los Curadores Urbanos otorgan o niegan licencias urbanísticas.

En relación con este aspecto, el parágrafo 2º del artículo 37 del Decreto Nacional 564 de 2006 establece:

"(...)

Artículo 37. De la revocatoria directa. Al acto administrativo que otorga la respectiva Licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

(...)

Parágrafo 2. Podrán solicitar la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de licencias urbanísticas, los solicitantes de las licencias, los vecinos colindantes del predio objeto de la



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

solicitud, los terceros que se hayan hecho parte en el trámite y las autoridades administrativas competentes

Por su parte, el párrafo del artículo 1º del Decreto Distrital 191 de 2006, prevé lo siguiente:

"(...)

Artículo 1-

(...)

- *Parágrafo.- Son competentes para solicitar la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se otorgan o niegan licencias, entre otras autoridades y personas, los titulares de las licencias, los vecinos del predio objeto de solicitud, y la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, a través del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA.*

•

(...)"(subrayado y negrilla fuera de texto)

Respecto de la competencia del Contralor Distrital de Bogotá D.C., para solicitar la revocatoria directa, debe indicarse:

- El artículo 267 de la Constitución Política de 1991, señala que la Contraloría General de la República y por extensión, las contralorías departamentales y/o municipales, se encargarán de realizar el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación¹, labor que incluye "... el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. ..." (Negrillas y subrayas fuera de texto), labor que la Corte Constitucional de Colombia ha establecido como un "... Control fiscal del Estado sobre la Administración Pública (gestión, actividad y actos de funcionarios) y las personas particulares (públicas o privadas) que manejen fondos o bienes del Estado ..."², donde las contralorías "... vigilan el manejo fiscal y administrativo, el cumplimiento de la ley y la moralidad pública, y que verifican los resultados de las gestiones estatales"³ (Negrillas y subrayas fuera de texto).

- En materia urbanística, el Contralor Distrital de Bogotá D.C., o cualquier otro funcionario de la administración, independiente de las competencias específicas a ellos asignadas, pueden realizar peticiones de revocatoria directa, en la medida que el artículo 4º de la Ley 388 de 1997, dispone:

¹ En relación con las expensas que reciben los Curadores urbanos en ejercicio de su labor, se ha indicado en reiteradas ocasiones que ellas son objeto de control fiscal.

² Corte Constitucional. C.C. Sentencia C-113-99, Febrero 24

³ Ibídem.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

"Artículo 4º.- Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. (...).

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos."

De acuerdo con las normas transcritas, la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. se encuentra habilitada para solicitar la revocatoria directa de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Lo anterior, por cuanto la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D. C. hace parte del concepto genérico "autoridad" previsto en el Decreto Distrital 191 de 2006, y la legitima en su solicitud de revocatoria, por ser uno de los organismos de control que en Bogotá D. C., están instituidos en el Decreto Distrital 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá"⁴.

Así las cosas, el Despacho encuentra que la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D. C. hace parte de las autoridades facultadas para solicitar la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se otorgan o niegan licencias urbanísticas y en consecuencia, está legitimada para actuar en el presente trámite.

Establecida la oportunidad, procedencia y legitimidad de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D. C. para solicitar la revocatoria directa, a continuación se analizarán cada uno de los argumentos expuestos.

⁴ Artículos 45 y siguientes.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

2. EN RELACIÓN CON LA ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA Y SITUACIÓN DE RIESGO DEL PREDIO.

Al respecto, los diferentes conceptos técnicos manifiestan:

La entonces Subdirección de Planeamiento Urbano (hoy Subsecretaría de Planeación Territorial) mediante memorando 3-2006-06896 (folios 155 a 156 cuaderno 1) del 17 de octubre de 2006, concluyó en su concepto técnico lo siguiente:

"(...)Con los antecedentes mencionados, se puede concluir que la Urbanización San Cayetano de la Localidad de San Cristóbal cuenta con dos (2) zonificaciones según el plano elaborado por Ingeominas en 1988, "Zona de Riesgo: III-M y V-AM" esta última no tomada en consideración por el Curador Urbano al otorgar la Licencia de Urbanismo mediante Resolución N° CU2-98-278 de diciembre 14 de 1998, (...) (subrayado y negrilla fuera de texto)

No obstante lo anterior, dicha dependencia recomendó solicitar el concepto de Riesgo a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE, oficina competente para determinar la existencia o no de riesgo, en el Distrito Capital, según lo establecido en el Decreto 657 de 1994 y en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Por su parte la DPAE, conceptuó mediante Oficio RO 2027 del 1° de diciembre de 2006 (folios 161 a 163 cuaderno 1), así:

"(...) En la Solicitud para la Licencia de Urbanismo aprobada mediante resolución No. CU2-98-278 del 14 de Diciembre de 1998, el predio fue ubicado en zona de riesgo III-M según el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá (Convenio 200-86 DAPD-INGEOMINAS); personal técnico de ésta entidad ubicó el predio utilizando la información contenida en las licencias suministradas en la solicitud y encontró que los lotes que conforman la Urbanización se encuentran localizados en una zona de transición entre III-M y V-AM(...)" (subrayado y negrilla fuera de texto)

Sin embargo, en el concepto técnico emitido por la DPAE se sugirió a esta entidad que la información fuese validada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS- como responsable de la información contenida en el plano de zonificación geotécnica.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

En el concepto técnico emitido por INGEOMINAS OFICIO SAGEA-247 del 4 de diciembre de 2007 (folios 260 a 265 cuaderno 2), se determinó que:

"(...) De acuerdo a estas coordenadas y tal como se observa en la Figura 1, el área total de interés es de 76223.1 m² de las cuales 26488.35 m² correspondientes al 34.75% se encuentran en la zona IIIM, y 49734.84 m² correspondientes al 65.24% pertenecen a V AM las cuales se describen en la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
V-AM	De muy alto riesgo; zona con la mayor cantidad de deslizamientos, que han sido acelerados por deficiencias en el sistema de alcantarillado existente por falta de él. Calles destapadas y fuertes, construcción sobre rellenos y sectores de chircales.	Construcción de sistemas de alcantarillado, drenaje, reforestación, evitar la urbanización sobre rellenos o botaderos. Los estudios de suelos para estas zonas deberán llevar análisis de estabilidad.
III-M	Zonas de deslizamientos y carcavamientos potenciales.	El uso inadecuado del suelo puede agudizar el fenómeno de erosión.

De conformidad con los conceptos técnicos emitidos dentro del presente trámite, especialmente el expedido por INGEOMINAS el 4 de diciembre de 2007, el predio objeto de la licencia de urbanismo (Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998), se encontraba catalogado para el 7 de septiembre de 1998 (fecha en la cual se radicó la solicitud de licencia de urbanismo para el predio denominado San Cayetano) según el Mapa de Zonificación Geotécnica de Bogotá, como V-AM y III-M. De manera que una parte del predio se consideraba como de MUY ALTO RIESGO (V-AM), y la otra como una zona de deslizamiento y carcavamientos potenciales (III-M).

Al respecto, el apoderado de la sociedad titular de los actos administrativos aquí cuestionados, afirmó en su comunicación del 8 de agosto de 2006, que *"se trata de un plano elaborado por Ingeominas a escala 1:25000, por cuyas características y antigüedad no permite en este momento identificar o aproximar la ubicación de la Urbanización San Cayetano, ni aún utilizando las coordenadas por cuanto estas no se ajustan a las establecidas en los planos topográficos y urbanísticos aprobados e incorporados en las planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi"*.

En relación con la anterior aseveración, este Despacho no encuentra sustento alguno en ella, por cuanto el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS- en los distintos pronunciamientos efectuados dentro del presente trámite, en ningún



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

momento se refiere a imprecisiones o márgenes de error en el plano 6-37 A del estudio de "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ".

Así, en el primer concepto técnico emitido el 18 de enero de 2007, -INGEOMINAS- solicitó la verificación de las coordenadas de los predios objeto de licencia con el fin de compararlas con las remitidas por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE, y de esta forma dar un concepto definitivo, pero en ningún momento cuestionó la posibilidad de ubicar con exactitud el predio una vez confirmadas dichas coordenadas, tampoco hizo mención alguna a la falta de idoneidad del Mapa de Zonificación Geotécnica para efectos de determinar la situación de riesgo de cualquier predio en la ciudad, antes de la entrada en vigencia del Decreto Distrital 619 de 2000. Por el contrario, manifestó que "El mapa de zonificación Geotécnica tiene base topográfica tomada del SADEC y del IGAC, con origen Bogotá."

Ahora bien, de acuerdo con lo recomendado por -INGEOMINAS-, la Subsecretaría de Planeación Territorial, procedió a la verificación de las coordenadas del predio, las cuales fueron confirmadas, así:

ESTE 96714.83
ESTE 97165.15

NORTE: 95799.02
NORTE: 95844.64

Con base en esta ubicación cartográfica, INGEOMINAS estableció que "el área total de interés es de 76223.1 m² de las cuales 26488.35 m² correspondientes al 65.24 % pertenecen a V AM..."

Es de anotar, que las anteriores coordenadas no fueron desvirtuadas por el doctor GONZALEZ GARAVITO. Por el contrario, en su oficio del 13 de diciembre de 2007 acepta que el plano urbanístico "coincide en su totalidad con las nuevas coordenadas proyectadas por el (sic) INGEOMINAS.."

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que más del 50 % del área del predio se encontraba zonificado como de Muy Alto Riesgo V-AM, no resultan satisfactorios los planteamientos de dicho apoderado, pues el error en la zonificación geotécnica del predio por parte de la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C. no puede tener justificación en una supuesta imprecisión o falta de idoneidad del Mapa de Zonificación Geotécnica. Este hecho no tiene ningún sustento técnico, ni jurídico.

Contrario sensu, el Decreto Distrital 734 de 1993, "Por el cual se reglamentó el Proceso de Desarrollo por Urbanización en las áreas Urbanas de Santa Fe de Bogotá, D.C.", le otorgó plena validez al referirse específicamente "al mapa de zonificación geotécnica de Santa Fe de Bogotá



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

elaborado a escala 1:25.000 por Ingeominas para efectos de localizar los predios situados en áreas de alto y muy alto riesgo.⁵

De igual forma, se encuentra que no existe en ninguno de los pronunciamientos técnicos allegados a la presente actuación, afirmación o alusión alguna, a una posible imprecisión del citado mapa de zonificación, que respalde el cuestionamiento efectuado por el apoderado de la sociedad titular de las licencias en estudio.

Debe precisarse además, que el estudio de "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ" fue realizado por INGEOMINAS en el año de 1986 y no en octubre de 2006 como lo deduce el doctor GONZALEZ GARAVITO en su escrito del 13 de diciembre de 2007, en el que presentó objeciones al último concepto técnico emitido por INGEOMINAS. Cuando dicha entidad manifiesta que fue "entregado en octubre de 2006", se refiere al primer concepto técnico emitido en el presente trámite de revocatoria directa y no al plano 6-37 A del estudio de "ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ".

3. EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS REFERIDOS A LA PROHIBICIÓN DE ADELANTAR OBRAS DE URBANISMO SOBRE EL PREDIO

Para la fecha de radicación de la solicitud de licencia de urbanismo otorgada mediante Resolución No. CU2 98-278 del 14 de diciembre de 1998, esto es, el 7 de septiembre de 1998⁶, se encontraban vigentes los Decretos Distritales 734 de 1993 y 657 de 1994.

El artículo 3º del Decreto Distrital 734 de 1993, establecía lo siguiente en cuanto a los predios que se excluían del desarrollo por urbanización:

"(...) Artículo 3º.- Predios que se excluyen de este Proceso. Se excluyen de la posibilidad de desarrollo todos los predios urbanizables no urbanizados localizados en las siguientes áreas:

. Las de "alto" y "muy alto riesgo", según el mapa de zonificación geotécnica de Santa Fe de Bogotá elaborado a escala 1:25.000 por Ingeominas.

. Las de "alta y media vulnerabilidad", según el Plan de Ordenamiento Físico del Área de Preservación del Sistema Orográfico.

⁵ Decreto 734 de 1993, artículo 3º. *"(...) Se excluyen de la posibilidad de desarrollo todos los predios urbanizables no urbanizados localizados en las siguientes áreas: las de "alto" y "muy alto riesgo", según el mapa de zonificación geotécnica de Santa Fé de Bogotá elaborado a escala 1:25.000 por INGEOMINAS(...)"*

⁶ Boleta de radicación obrante a folio 1.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

. Las de alto riesgo que se definan por estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte oficialmente la Administración Distrital.

. Las degradadas por actividad extractiva o desestabilizadas.

La exclusión de que trata este artículo subsistirá mientras no se demuestre previamente, ante la Secretaría de Obras Públicas, la posibilidad de controlar el factor de riesgo y esa entidad expida la certificación preliminar de estabilidad de terrenos con la indicación de los estudios necesarios para obtener la licencia de urbanización. De ser posible el desarrollo urbanístico, la licencia que se conceda para adelantar obras de urbanismo conlleva el compromiso de adelantar las obras de protección requeridas. El desarrollo por construcción se podrá adelantar únicamente cuando tales obras hayan sido ejecutadas.(...)"

Por su parte, el artículo 3º del Decreto Distrital 657 de 1994, prohibió la construcción de inmuebles y la prestación de servicios públicos domiciliarios en predios ubicados en zonas definidas como de alto riesgo. La norma es del siguiente tenor:

"(...)

Artículo 3º.- Prohíbese la construcción de inmuebles y la prestación de servicios públicos domiciliarios en predios ubicados en zonas definidas como de alto riesgo por la oficina para Prevención y Atención de Emergencias.

(...)"

Una vez analizados los documentos integrantes del expediente que sustenta el trámite y expedición de la Resolución No. CU2 98-278 del 14 de diciembre de 1998, por la cual se aprobó "...el proyecto urbanístico del desarrollo denominado SAN CAYETANO (antes El Banco), se establecen sus normas, se concede licencia de urbanización y se fijan las obligaciones a cargo del urbanizador responsable" no se encontró documento alguno, que acredite la posibilidad de controlar el factor de riesgo ante la Secretaría de Obras Públicas, tampoco la certificación expedida por dicha entidad de la estabilidad de los terrenos con la indicación de los estudios necesarios para obtener la licencia de urbanización.

Así mismo, no se determina en el texto del acto administrativo en cuestión, obligación alguna de adelantar las obras de protección requeridas para el terreno, como lo ordenaba el Decreto Distrital 734 de 1993.

Así las cosas, encuentra este Despacho hasta el momento demostradas dos irregularidades en la expedición de la Resolución No. CU2 98-278 del 14 de diciembre de 1998, por parte de la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.:



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

- a. La zonificación Geotécnica del predio se cataloga como III M, desconociendo que más del 65 % del mismo se encontraba clasificado como V-AM según el Mapa de "ZONIFICACIÓN GEOTECNICA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ, es decir, en zona de Muy Alto Riesgo.
- b. A pesar de estar catalogada gran parte del predio como de Muy Alto Riesgo, no se cumplieron los requisitos establecidos por el artículo 3º del Decreto Distrital 734 de 1993.

No obstante lo anterior, dichas irregularidades a criterio de este Despacho corresponden a errores en la aplicación de la norma por parte de la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C. y no ha una abierta, abrupta e incontrovertible actuación ilícita, que haya viciado el consentimiento de la administración en el trámite y expedición del acto administrativo.

4. EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS SOBRE EL PREDIO

Al respecto, debe indicarse que aunque existía una prohibición en el artículo 3º del Decreto Distrital 657 de 1994, de prestar servicios públicos domiciliarios en predios ubicados en zonas definidas como de alto riesgo, se observa en el expediente No. 98-02-0945, que contiene el trámite y expedición de la Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, que los interesados allegaron los siguientes documentos que certifican la disponibilidad de los distintos servicios públicos domiciliarios sobre el predio:

- Empresa de Teléfonos de Bogotá, oficio 205786 (Folio 18)
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, oficio 7200-98U-1185 (Folios 19,20 y 21)
- Empresa de Energía de Bogotá, Oficio 000838, folios 22 y 23.

Debe precisarse, que al Curador Urbano no le correspondía el análisis de la legalidad de las mencionadas certificaciones, simplemente su función se circunscribía a verificar que fueran anexadas a la solicitud de licencia y que correspondieran al predio objeto de la misma.

Tampoco es función de la Secretaría Distrital de Planeación en el trámite de la revocatoria directa, cuestionar o realizar un control sobre la legalidad de los actos que expiden las Empresas encargadas de prestar los servicios públicos domiciliarios, lo cual es competencia de otras autoridades.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

5. EN CUANTO A LOS ARGUMENTOS REFERIDOS A LA PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE URBANISMO No. CU2-98-278 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1998

En este punto, LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. plantea que la Curaduría Urbana No. 2 de Bogotá D.C., autorizó la prórroga de la Licencia de Urbanismo No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, de manera extemporánea, por cuanto ya se había vencido su término de vigencia.

Al respecto, el artículo 24 del Decreto Nacional 1052 de 1998, norma de procedimiento aplicable, establecía lo siguiente en cuanto a la vigencia y prórroga de las licencias:

"(...) Artículo 24º.- Vigencia y prórroga. Las licencias tendrán una vigencia máxima de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria.

Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y construcción, éstas tendrán una vigencia máxima de treinta y seis (36) meses prorrogables por un periodo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria.

La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.

***Parágrafo Transitorio.** Durante el término de doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto, podrá concederse una segunda prórroga de doce (12) meses a la vigencia de las licencias referidas en el presente artículo, siempre y cuando se formule la solicitud dentro de los treinta días calendario anteriores al vencimiento del término previsto en la primera prórroga y el urbanizador o constructor certifique la iniciación de la obra.(...)"*

Del análisis de la licencia de urbanismo expedida mediante Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, se observa que ésta cobró ejecutoria, el 15 de enero de 1999⁷ y su vigencia era de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez hasta treinta y seis (36) meses.

De acuerdo a lo anterior, la vigencia de la citada licencia de urbanismo, era hasta el 15 de enero de 2001, debiendo sus titulares para efectos de obtener la prórroga, radicar la solicitud dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su vencimiento y allegar la correspondiente certificación de iniciación de la obra por parte del urbanizador o constructor responsable.

En el caso de la Resolución No. CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, se encuentra en el expediente respectivo, que el señor ÁLVARO HERNÁN VÉLEZ TRUJILLO en su calidad de representante legal de la sociedad TRIADA LTDA., solicitó a la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C. el 21 de diciembre de 2000, prórroga de la licencia de urbanismo aprobada

⁷ Folio 26.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

mediante Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, modificada mediante Resolución No. CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, para lo cual allegó la certificación de inicio de obras por parte del constructor responsable.⁸

De esta forma, se verifica que los titulares de la citada licencia de urbanismo, dieron cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto Nacional 1052 de 1998, para obtener la respectiva prórroga.

Nótese, que el plazo que tomó el Curador Urbano para resolver la prórroga y el hecho de que la Resolución No. CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, haya sido expedida con posterioridad al vencimiento de la vigencia de la licencia de urbanismo contenida en la Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, no son factores que vicien la legalidad de la prórroga concedida, ya que se entiende que la ampliación del término en doce (12) meses, empieza a contarse desde el momento del vencimiento del plazo inicial de la licencia y no desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo que concede la prórroga.⁹

Así las cosas, este Despacho no advierte vicio o ilegalidad alguna en la prórroga contenida en la Resolución No. CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, por lo que los argumentos del CONTRALOR DE BOGOTA D.C. en este punto, no están llamados a prosperar.

6. REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN No. CU2-2002-112 DEL 10 DE MAYO DE 2002 - POR LA CUAL SE CONCEDE NUEVA LICENCIA DE URBANIZACIÓN, PARA CONTINUAR Y FINALIZAR LAS OBRAS DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DENOMINADO SAN CAYETANO, SE RATIFICAN SUS NORMAS Y LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL URBANIZADOR RESPONSABLE-

En su libelo, el CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., afirma que la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C., en el trámite y expedición de la Resolución No. CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, no solamente desconoció que el predio objeto de las licencias urbanísticas otorgadas estaba ubicado en Zona de Muy Alto Riesgo de Deslizamiento, sino que no solicitó los estudios técnicos adecuados para el caso, amparándose en el tránsito de

⁸ Folio 28 expediente 2000-2-1378

⁹ Se trata de la correcta interpretación del artículo 24 del Decreto Nacional 1052 de 1998, la cual, fue recogido posteriormente por el art. 7 del Decreto Nacional 4397 de 2006, así:

"Artículo 7°. El artículo 41 del Decreto 564 de 2006 quedará así:

"Artículo 41. Vigencia de las licencias. Las licencias de urbanización, parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas.

Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y construcción, estas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogables por un período adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo mediante el cual se otorgan las respectivas licencias." (subrayado y negrilla fuera de texto)



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

normas urbanísticas previsto en el artículo 25 del Decreto Nacional 1052 de 1998, desatendiendo los objetivos y principios señalados en la Ley 388 de 1997.

Al respecto, es preciso realizar un análisis de la legalidad formal de dicha solicitud de licencia.

El Decreto Nacional 1052 de 1998 en su artículo 254 establecía lo siguiente en cuanto al régimen de transición normativa:

"(...) Artículo 25º.- Tránsito de normas urbanísticas. Cuando una licencia pierda su vigencia por vencimiento del plazo o de la prórroga, el interesado deberá solicitar una nueva licencia ajustándose a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud.

Sin embargo, si las normas urbanísticas vigentes al momento de la expedición de la licencia vencida hubieren sido modificadas, el interesado tendrá derecho a que la nueva licencia se le conceda con base en la misma norma en la que se otorgó la licencia vencida, siempre que no haya transcurrido un término mayor a un (1) mes calendario entre el vencimiento de la licencia anterior y la solicitud de la nueva licencia, y además que las obras, se encuentren en los siguientes casos, que serán certificados por el constructor o urbanizador responsable ante la autoridad competente para la expedición de la licencia. La certificación se dará bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada por la presentación de la solicitud.

- 1. En el caso de las licencias de urbanismo, cuando las obras de la urbanización se encuentren ejecutadas en un treinta (30%) por ciento.*
- 2. En el caso de las licencias de construcción cuando por lo menos la mitad de las unidades constructivas autorizadas, cuenten como mínimo con el cincuenta (50%) por ciento de la estructura portante o el elemento que haga sus veces, debidamente ejecutada. (...)"*

En el caso sub lite, y una vez verificados los documentos que componen el expediente radicado con el No. 2002-2-0461 del 11 de abril de 2002, se encontró que los interesados allegaron los siguientes documentos:

- Formulario de solicitud suscrito por el representante legal de la sociedad Triada Ltda. (folios 180 y 181)
- Certificado de tradición y libertad del predio objeto de solicitud de licencia con vigencia no mayor a tres (3) meses (folios 183 a 182)
- Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante (folios 184 a 186)
- Certificado de disponibilidad del servicio de acueducto (folios 189 a 192)
- Certificado de disponibilidad del servicio de energía eléctrica (folios 193 a 196)
- **Certificado de avance de obra del 85 %** (folio 197)
- Valla de comunicación (registro fotográfico a folios 200 y 201)



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

No obstante haberse presentado los documentos exigidos por el artículo 25 del Decreto Nacional 1052 de 1998, para acceder al tránsito normativo, este Despacho encuentra que en el momento de la radicación de la solicitud de la nueva licencia de urbanismo, ya habían transcurrido más de treinta (30) días calendario después del vencimiento de la licencia de urbanismo, contenida en la Resolución No. CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998.

En efecto, se encuentra que la licencia de urbanismo anterior, venció el 15 de enero de 2002 (la prórroga concedida mediante Resolución No. CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, amplió la vigencia hasta el 15 de enero de 2002)¹⁰, de manera que la solicitud de nueva licencia de urbanismo necesariamente debía radicarse antes del 15 de febrero de 2002, para que pudiese acceder al tránsito normativo.

Sin embargo, dicha solicitud fue efectuada el 11 de abril de 2002, es decir más de treinta (30) días calendario después del vencimiento de la licencia de urbanismo, de manera que no podía acceder al tránsito normativo y debía ajustarse en su totalidad a las normas urbanísticas vigentes al momento de la nueva solicitud.

A pesar de esto, la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C., en la Resolución No. CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, decidió conceder la nueva licencia con base en las mismas normas urbanísticas y arquitectónicas bajo las cuales se otorgó la licencia anterior, infringiendo de esta forma el artículo 25 del Decreto Nacional 1052 de 1998.

Así las cosas, se evidencia una clara ilegalidad en la expedición de la nueva licencia de urbanismo contenida en la Resolución No. CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, para el desarrollo urbanístico denominado San Cayetano, al acceder irregularmente al tránsito normativo y no haber dado aplicación a las normas vigentes al momento de la radicación de la solicitud de nueva licencia de urbanismo.

No obstante lo anterior, este Despacho encuentra que la indebida aplicación del artículo 254 del Decreto Nacional 1052 de 1998 no se constituye en un medio ilegal que habilite a la administración para revocar de manera unilateral el acto administrativo de carácter particular y concreto de que trata este capítulo, sin el consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular, tal y como se analizara más adelante.

¹⁰ Tal y como se señaló en precedencia, el plazo concedido en la prórroga se debe contar desde el momento del vencimiento de la licencia y no desde la ejecutoria del acto que concede la prórroga.



Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

7. EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

En su solicitud de revocatoria directa, el CONTRALOR DE BOGOTA D.C., argumentó que la Curadora Urbana No 2 de Bogotá D.C., no tuvo en cuenta en la expedición de las licencias de construcción las normas referentes a la accesibilidad de personas con movilidad reducida, en cuanto a medidas de estacionamientos y rampas de acceso, aún cuando se trata de un proyecto implantado en alta pendiente.

De acuerdo con el concepto técnico expedido por la Subsecretaría de Planeación Territorial, en el que analiza los planos integrantes de las licencias de construcción No. LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C., se determinó que en el proyecto no se señaló ningún tipo de rampa que permitiera el desplazamiento y acceso a personas con movilidad reducida en las áreas de uso comunal, ni a las diferentes etapas de la urbanización, teniendo en cuenta que se trata de un terreno inclinado y que los cambios de nivel planteados en los senderos se realizan únicamente mediante escaleras, lo cual impide la circulación a personas con movilidad reducida.

Igualmente, la Subsecretaría de Planeación Territorial en el concepto emitido el 14 de diciembre de 2007, detectó que los 4 cupos de estacionamientos planteados para personas con movilidad reducida, no cuentan con las dimensiones mínimas requeridas por la norma, es decir (4.50 mts X 3.80 mts).

En consecuencia, las citadas licencias de construcción no cumplen con las normas exigidas, en lo referente a los estacionamientos y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

En este tema, el apoderado de la sociedad TRIADA LTDA, presentó objeciones al concepto técnico emitido por la Subsecretaría de Planeación Territorial, argumentando que al momento de la solicitud y posterior a la expedición de las Licencias de Construcción 2000-2-0086, 2000-2-0046 y 2002-2-0241, la norma que regulaba los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones físicas, era la Ley 361 de 1997, la cual consagra una serie de obligaciones generales respecto de la eliminación de barreras arquitectónicas, norma que para el 7 de septiembre de 1998, (fecha de radicación de la solicitud de licencia de urbanización) no se encontraba reglamentada.

La Ley 388 de 1997, establece en su artículo 99 que las licencias de construcción se otorgaran con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan.



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Al respecto, este Despacho considera que si bien, la Ley 361 de 1997, es la norma por la cual se establecieron los mecanismos de integración social de las personas con limitación física y, que ésta fue reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, no es menos cierto, que para la época de la expedición de las mencionadas licencias de construcción, se encontraban igualmente vigentes, las siguientes normas:

- Decreto Nacional 108 del 28 de enero de 1985, *"Por el cual se establecen normas urbanísticas, arquitectónicas y de construcción y se precisan responsabilidades institucionales tendientes a que la ciudad de Bogotá sea accesible a las necesidades de los minusválidos y de los sectores de la población de movilidad reducida.."*
- Resolución 14861 del 4 de octubre de 1985 del Ministerio de Salud *"por el cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud, y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos"*.
- Decreto Distrital 321 de 1992 *"Por el cual se dictan normas generales para los Estacionamientos de servicio al público, tal como lo establece el literal B del Artículo 460 del Acuerdo 6 de 1990"*
- Ley 400 de 1997 *"Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes"*

Las anteriores normas, debían ser observadas por parte de la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C, por cuanto contienen disposiciones específicas a las cuales debían someterse los proyectos arquitectónicos sometidos a su consideración y que además se encontraban vigentes tanto para la época de la licencia de urbanismo contenida en la Resolución CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, como en el momento de la radicación de las solicitudes de las licencias de construcción referidas.

Por su parte, el concepto técnico emitido por la Subsecretaría de Planeación Territorial, encontró que en la licencia de construcción No. LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000 no se cumplió con el párrafo 1º del artículo 8º del Decreto Distrital 321 de 1992, por cuanto en el plano U-1.01.01, se señalan 4 cupos de estacionamientos para personas con movilidad reducida, que no cuentan con las dimensiones mínimas requeridas (4.50 mts X 3.80 mts)

De igual forma, el concepto técnico expresó que en los planos arquitectónicos no se señaló ningún tipo de rampa que permitiera el desplazamiento y acceso a personas con movilidad reducida en las áreas de uso comunal, ni a las diferentes etapas de la urbanización. Considerando que se trata de un terreno inclinado y que los cambios de nivel planteados en los senderos, se realizan únicamente mediante escaleras, lo que dificulta la accesibilidad a las personas con movilidad reducida.

En consecuencia, los argumentos expuestos por el apoderado de la sociedad TRIADA LTDA, no pueden ser acogidos por este Despacho.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

En cuanto a las pretensiones de la CONTRALORIA DISTRITAL respecto de estas Licencias, debe señalarse que el error en la aplicación de las normas por parte del Curador Urbano o su inaplicación, es considerado un error de derecho y no un medio ilegal que habilite a la administración para revocarlas sin el consentimiento expreso y escrito de su respetivo titular.

8. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO Y MITIGACIÓN

En concepto técnico CT -5107 del 28 de diciembre de 2007 la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE, realizó la cuarta revisión del "ANÁLISIS DE RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA DEL TALUD ORIENTAL DEL PROYECTO URBANIZACIÓN SAN CAYETANO UBICADO EN LOS CERROS SUR ORIENTALES DE BOGOTÁ" y concluyó que dicho estudio cumple con los términos de referencia establecidos por la DPAE para la elaboración de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa. Además se realizaron las siguientes recomendaciones:

"(...)Dadas las condiciones particulares del sector donde se encuentra la urbanización San Cayetano, se recomienda que para la construcción de las obras de mitigación, se implemente un plan de monitoreo, que tenga en cuenta las distintas etapas constructivas, de tal manera que si se advierten problemas de inestabilidad, se pueden tomar oportunamente los correctivos necesarios. Adicionalmente se deben adoptar por parte del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal forma que se garantice la vida de los trabajadores que estarán en la zona, así como de los residentes que habitan actualmente la urbanización San Cayetano(...)"

ANÁLISIS SOBRE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS

8.1 Naturaleza jurídica de las licencias urbanísticas

A la luz de lo establecido en el numeral 6° del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, las licencias de urbanismo y de construcción son otorgadas por las autoridades competentes a través de actos administrativos, a los cuales le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

Por su parte el Decreto Nacional 564 de 2006, establece en su artículo 1° el concepto de Licencia Urbanística como la autorización previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones, y para la intervención



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional.

En dicha reglamentación existen disposiciones que determinan inequívocamente el carácter de "acto administrativo" de las licencias urbanísticas, como el artículo 7 parágrafo 1°, el artículo 18 numeral 8, el artículo 19 parágrafo 1°, el artículo 20 parágrafo 1°, el artículo 21 parágrafo 1°, el artículo 23 parágrafo 2°, el artículo 30, el artículo 33, el artículo 34, el artículo 35, el artículo 37, el artículo 41 parágrafo 1° y el artículo 42.

El acto administrativo por el cual el Curador Urbano o la autoridad competente concede o niega una licencia urbanística, tiene las siguientes características:

- Es un acto administrativo que opera en el campo de los derechos y de los deberes, por cuanto por su intermedio la autoridad administrativa atribuye a otros potestades o derechos propios, como es la autorización para adelantar obras de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios; de construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones¹¹.
- Es un acto definitivo, porque contiene la voluntad de la administración, ya sea otorgando o negando la licencia solicitada. Es decir, es el acto administrativo que resuelve de fondo la solicitud de licencia urbanística.
- Es un acto de carácter particular y concreto pero con efectos inmediatos de carácter general, (clasificación mixta), ya que, el interés no sólo lo tienen los titulares de la licencia, sino los vecinos del predio objeto de la solicitud, y las autoridades administrativas encargadas de vigilar y controlar el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial y de las normas urbanísticas.¹²

8.2 Régimen aplicable la revocatoria directa de las licencias urbanísticas

Al respecto, el artículo 4° de la Ley 388 de 1997, establece que *"La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos."*

¹¹ Carlos Ariel Sánchez Torres, Acto administrativo. Teoría General, 3 ed., Bogotá, Legis Editores, cit., pp. 198.

¹² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Radicación 1643, 2 de junio de 2005.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

El artículo 99 *ibídem*, preceptúa que al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

Por su parte, el Decreto Nacional 564 de 2006, recogiendo el mismo sentido de algunas normas que le precedieron, como el Decreto Nacional 2111 de 1997, el Decreto Nacional 1052 de 1998 y el Decreto Nacional 1600 de 2005, determinó lo siguiente respecto de la revocatoria de las licencias urbanísticas:

"(...) Artículo 37: Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1º. Contra los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos otorguen o nieguen licencias urbanísticas, procede la revocatoria directa ante el mismo curador o ante el alcalde municipal o distrital o su delegado, en los términos previstos en el Título V de la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 2º. Podrán solicitar la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de licencias urbanísticas, los solicitantes de las licencias, los vecinos colindantes del predio objeto de la solicitud, los terceros que se hayan hecho parte en el trámite y las autoridades administrativas competentes.(...)"

De la lectura de las normas transcritas en precedencia, resulta claro que no existe un régimen especial para la revocatoria directa de las licencias urbanísticas, ya que se hace una remisión expresa a las disposiciones generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo.

8.3 La Teoría General de la revocatoria de los actos administrativos

El Decreto Ley 1 de 1984 Código Contencioso Administrativo, consagra en su Título V la figura jurídica de la revocatoria directa, como un mecanismo que permite a la propia administración, de oficio o a solicitud de parte, la revisión de sus propios actos.

En su artículo 69, se enuncian de manera taxativa las causales por las cuales pueden ser revocados los actos administrativos, así:

"(...) ARTÍCULO 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. (...)”

Se constituye así la revocatoria directa, como una prerrogativa de la administración para volver sobre sus propios actos y retirarlos del mundo jurídico, si se presenta alguna de las causales anteriormente enunciadas.

En palabras de la Corte Constitucional, la revocabilidad es una de las características propias del acto administrativo, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras a asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social. Cuando se trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo o una situación jurídica particular y concreta en favor de una persona no son revocables sino con el consentimiento escrito y expreso del titular del derecho¹³.

En una consagración del principio de inmutabilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, que ya se encontraba presente en el artículo 21 del Decreto 2733 de 1959, el artículo 73 de dicha codificación establece límites a la potestad revocatoria de la administración, supeditándola a la existencia del consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular. Agrega además la norma, dos excepciones a la intangibilidad de esta clase especial de actos, habilitando a la administración para revocarlos unilateralmente, aún cuando no medie el consentimiento escrito y expreso del titular, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo si se dan las causales previstas en el artículo 69 o, si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

La norma citada, es del siguiente tenor:

“(...)ARTÍCULO 73.Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

¹³ Corte Constitucional, SENTENCIA T-347/94, 3 de agosto de 1994.



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto

(...)"

La interpretación del anterior precepto, ha generado una diversa y poco unificada producción jurisprudencial, de la cual, sin embargo, es posible extraer algunos elementos que permitirán llegar a una posición en la cual se logre un equilibrio entre las prerrogativas de la administración respecto de la preservación del orden jurídico, por una parte, y el respeto de los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica, por el otro.

8.4 Las posiciones jurisprudenciales en torno a la interpretación del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo

Corte Constitucional

En Sentencia T-639/96, Expedientes T-100.559 y T-100.563 (acumulados), Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA, del veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), se hace énfasis en el principio de inmutabilidad o intangibilidad de los actos administrativos de carácter particular y concreto, haciendo referencia a anteriores pronunciamientos y sustentándose en los principios de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos, sin embargo, admite como excepción a la irrevocabilidad la evidencia de medios ilegales en la obtención del acto administrativo, es decir la existencia de actuaciones fraudulentas, así:

"(...)"

2. Revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y concreto.

2.1. Criterios Doctrinales.

En América Latina la doctrina ha venido aceptando la tesis de la mutabilidad o inmutabilidad de los actos administrativos de acuerdo a quien van dirigidos o sobre quien recaen sus efectos; es así como se ha considerado que cuando un acto administrativo está dirigido en forma general y abstracta, a producir efectos sobre todo el conglomerado social o una parte importante de él, tiene esencialmente el carácter de revocable, según la valoración que de las circunstancias precisas al momento de su aplicación haga la Administración,



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

teniendo en cuenta para ello el interés general de toda la comunidad, según como afecten el interés público.

En contraposición a este postulado, aquellos actos administrativos cuyo objetivo es conceder un derecho o modificar una situación individual, es decir, dirigidos a causar efecto en una persona particular y concreta, y han sido notificados a su titular, no pueden ser revocados por la Administración sin el consentimiento expreso del destinatario de esa decisión, en aras de preservar la seguridad jurídica de los asociados en el sentido de garantizar que las autoridades no podrán disponer de los derechos adquiridos por los ciudadanos, sin que medie una decisión judicial.

La doctrina colombiana ha acogido estas posiciones sobre el tema de la revocatoria directa de los actos administrativos. En primer lugar, se dice que tratándose de actos de carácter general y abstracto, la Administración tiene la posibilidad de revocarlos en atención al interés público. En cuanto a aquellos actos administrativos de carácter particular y concreto, que establecen un derecho individual, la Administración no puede revocarlos directamente sin el consentimiento expreso del titular de dicho derecho.

(...)

2.2. Criterios jurisprudenciales

La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el tema de la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto, sosteniendo que, en principio, estos son irrevocables salvo que medie el consentimiento expreso y escrito de su titular, lo cual obedece a "razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la Administración a través de un acto administrativo". (Sentencia T-347 de 1994, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

En consecuencia, el acto creador de situaciones individuales no puede ser revocado sin el consentimiento de su titular, pues tal actuación está expresamente prohibido por la Ley. para que pueda darse tal revocatoria, es necesario que "la propia Administración evite el quebrantamiento de la norma superior de derecho" acudiendo a la acción contenciosa en donde, "además de la nulidad del acto, se obtenga el restablecimiento del derecho conculcado." (Sentencia 584 de 1992. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero)



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. Nº 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

No significa lo anterior, que en ningún caso pueda la Administración revocar directamente los actos administrativos de carácter particular y concreto que establecen una situación jurídica o confieren un derecho individual, pues, como quedó dicho, el propio artículo 73 del C.C.A. en su inciso segundo permite que tal revocatoria se dé cuando en el nacimiento de dicho acto a la vida jurídica concurren circunstancias como la de que "fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales."

Esta última posición ha sido sostenida por la Corte Constitucional en recientes pronunciamientos, en los cuales ha reconocido la posibilidad que tiene la Administración de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto, sin el consentimiento expreso de su titular, cuando en su expedición se da alguno de los supuestos descritos en el inciso 2° del artículo 73 del C.C.A., ya citado.

(...)

También en Sentencia del 27 de julio de 1994, la Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda del Consejo de Estado, en relación con el mismo tema sostuvo:

"Advierte la Sala que la resolución acusada no se fundamenta en que el acto revocado hubiese sido proferido como consecuencia de maniobras ilegales, circunstancia que, según las voces del art. 73 sí podría dar lugar a la revocatoria oficiosa del acto de carácter particular y concreto aún sin el consentimiento del particular afectado: la resolución solamente invoca como motivo de la revocatoria un posible agravio injustificado a los trabajadores involucrados, por no haberse culminado una investigación por "retención de salarios por los descuentos efectuados a los trabajadores del turno comprendido entre las 4:30 P.M. y las 12:30 del día 1° de diciembre de 1989". hecho que en forma alguna es imputable a la empresa, pues se trata de una omisión de la misma administración."

(...)

Sin embargo, lo anterior no significa que frente a los actos administrativos de carácter particular y concreto la Administración quede atada a su propia decisión hasta que ésta sea objeto de un pronunciamiento por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues en ciertas circunstancias -como lo reconocen el artículo 73 inciso 2o. del C.C.A. y la jurisprudencia- cuando la Administración encuentre que el acto es producto de maniobras fraudulentas, que la hicieron incurrir en un error, puede revocarlo directamente, oyendo a las partes y sin perjuicio de los derechos adquiridos, pues el propio Constituyente ha previsto que son dignos de protección sólo aquellos derechos que han sido adquiridos con justo título. Así lo define el artículo 58 de la Constitución Política, que a la letra dice:



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

(...)

Es indudable entonces, que cuando la autoridad que ha proferido un acto administrativo de carácter particular y concreto, encuentra que el mismo se obtuvo con fundamento en actuaciones ilegales o fraudulentas, tiene la facultad de revocarlo, pues en este caso, el interés que prima es aquel que tiene el conglomerado social en que las actuaciones de la Administración no se obtengan por medios que vulneren el ordenamiento jurídico. Ello atenta contra el derecho que tiene la ciudadanía a que las actuaciones del Estado se adelanten en forma equitativa, respetando el derecho que tienen los asociados de acceder a la Administración en igualdad de condiciones, derecho que no puede claudicar en favor de quienes utilizan mecanismos contrarios a la ley para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

En otro pronunciamiento, la Corte Constitucional ratifica el principio de inmutabilidad de los actos administrativos subjetivos, señalando que sólo puede procederse a su revocatoria sin el consentimiento del respectivo titular, cuando este debidamente probada la existencia de medios ilegales. Enfatiza el Alto Tribunal que no puede tratarse de una simple sospecha o de intuición en la ocurrencia de la actuación fraudulenta:

Sentencia T-336/97, Expediente T-129088 Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO quince (15) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).

"(...)

Bien se sabe que, como lo ha destacado la Corte, no obstante la facultad de la administración de revocar sus propios actos, carece ella de un carácter absoluto, pues en su ejercicio no puede atropellar los derechos de los particulares.

Por eso, según lo manda el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para que tal revocación pueda efectuarse, en el evento de haberse creado una situación jurídica particular y concreta o un derecho de la misma naturaleza, debe contar con la autorización expresa y escrita de su titular.

(...)

Esta Sala, por su parte, ha manifestado:

"En cuanto a la revocación que la administración haga de sus propios actos, la Corte reitera que no puede tener cabida cuando mediante ellos se han creado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto o se han reconocido derechos de la misma categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del mismo titular. La decisión unilateral del ente público toma de



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

sorpreza al afectado, introduce un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de la buena fe y delata indebido aprovechamiento del poder que ejerce, sobre la base de la debilidad del administrado". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-246 del 3 de junio de 1996).

(...)

Desde luego, como también lo ha reiterado la Corte, la administración está autorizada expresamente por el artículo 73, inciso 3, del Código Contencioso Administrativo para revocar, sin el consentimiento de la persona favorecida, el acto administrativo obtenido ilícitamente.

En tales hipótesis, no cabe duda de que en el origen de la situación jurídica individual que se reclama existe un vicio, que si es conocido por la Administración, no puede permanecer sustentando un derecho, como si éste se hubiese adquirido al amparo de la ley.

(...)

Pero, como puede verse, se trata de una excepción, que por tanto debe ser entendida y aplicada con carácter restrictivo.

La Corte en esta materia debe reiterar:

(...)

Es claro que no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en consecuencia, la motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así.

Obviamente, la Administración se compromete con lo que afirma, y ello significa que responderá por las imputaciones infundadas que haga si después los jueces no encuentran configurados actos delictivos o si no son responsables aquellas personas que se sindicaron en el acto administrativo.

(...)

La Corte reitera lo dicho en Sentencia T-315 del 17 de junio de 1996. (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía):



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

"Es importante recordar que, tratándose de la revocación de actos administrativos de carácter particular y creadores de derechos, es al ente administrativo, y no al particular, a quien corresponde poner en movimiento el aparato jurisdiccional demandando su propio acto. De esta manera, al particular se le garantiza que sus derechos se mantendrán inalterables, mientras la jurisdicción, agotadas las formas propias de un juicio, no resuelva en favor o en contra de sus intereses.

Dentro de este contexto, si la administración revoca directamente un acto de carácter particular y concreto generador de derechos, sin agotar uno de los requisitos señalados, vulnera los derechos de defensa y debido proceso del particular, derechos que, por mandato del artículo 29 de la Constitución, deben regir en las actuaciones administrativas.

Si la administración decide revocar el acto administrativo prescindiendo de la intervención del juez correspondiente, desconoce los principios de seguridad jurídica y legalidad que en este caso obran en favor del particular, quien confía que sus derechos se mantendrán inmodificables, hasta que él acepte que se modifiquen o el juez lo decida".

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

En Sentencia T-436/98, Expediente T-162 170 Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORÓN DÍAZ, del veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), la Corte Constitucional expresó que es posible revocar unilateralmente un acto administrativo de contenido particular y concreto cuando se evidencian actuaciones ilegales y fraudulentas que han precipitado una decisión de la administración sin justo título:

"(...)

3. Procedencia excepcional de la revocatoria directa de acto administrativo de carácter subjetivo

Es bien sabido que uno de los elementos definidores de la relación entre la Administración y los administrados es el de la confianza, por parte de éstos últimos, en que ella despliega su actuar dentro de un marco respetuoso de la seguridad jurídica. Y ello debe ser así como que ésta es un valor fundante del Estado de derecho, al punto que llega a confundirse con éste, como que se constituye en el esfuerzo más acabado de los hombres por racionalizar el ejercicio del poder a través del imperio de la ley.

Con esa perspectiva el legislador dispuso que la revocatoria directa, esto es el retiro del mundo jurídico de un acto administrativo, cuando éste es de carácter particular y concreto, no puede hacerse desconociendo los derechos adquiridos. Así lo dispone claramente el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo conforme al cual no se podrá hacer "sin el consentimiento expreso y escrito del



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

respectivo titular". Sin embargo añade que "Pero habrá lugar a la revocación de estos actos...si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales". Esta normativa ha de interpretarse en armonía con lo dispuesto por el artículo 58 Superior que garantiza "los derechos adquiridos con arreglo a las leyes" (subrayas fuera de texto).

En tal virtud, en forma reiterada la jurisprudencia de esta Corte con apoyo en las normas citadas y en la interpretación dada por el Consejo de Estado a las mismas, ha dejado en claro que si bien es cierto que las más de las veces ha de mediar el consentimiento del particular afectado en orden a proceder a revocar un acto por cuya virtud se ha creado una situación jurídica de carácter particular y concreto, no es menos cierto que una de las dos hipótesis excepcionales en que es viable ello es justamente cuando se trata de actuaciones ilegales y fraudulentas que han precipitado una decisión de la administración sin apoyo en un justo título.

(...)De manera que, habrá de reiterarse lo expresado por la jurisprudencia constitucional:

"Es indudable entonces, que cuando la autoridad que ha proferido un acto administrativo de carácter particular y concreto, encuentra que el mismo se obtuvo con fundamento en actuaciones ilegales o fraudulentas, tiene la facultad de revocarlo, pues en este caso, el interés que prima es aquel que tiene el conglomerado social en que las actuaciones de la Administración no se obtengan por medios que vulneren el ordenamiento jurídico. Ello atenta contra el derecho que tiene la ciudadanía a que las actuaciones del Estado se adelanten en forma equitativa, respetando el derecho que tienen los asociados de acceder a la Administración en igualdad de condiciones, derecho que no puede claudicar en favor de quienes utilizan mecanismos contrarios a la ley para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses" (Sentencia T 639 de 1996 MP Vladimiro Naranjo Mesa)

Lo anterior no significa, por supuesto, que este aserto no pueda ser desvirtuado ante la jurisdicción competente con las pruebas del caso, pero dado el carácter subsidiario del amparo no es en sede de tutela donde ha de ventilarse esta controversia.

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

En el mismo sentido, la Corte Constitucional resalta que la expedición del acto administrativo ha debido estar influida por la conducta ilícita del particular favorecido:

Sentencia T-759/99, Referencia: Expediente T-211426, Magistrado ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL octubre doce (12) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

"(...)



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

d) En síntesis, la posibilidad de la revocación directa de los actos de carácter particular y concreto o subjetivos sólo es posible en las siguientes circunstancias: i) cuando media el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular; ii) cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo; iii) si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales; iv) y en general, cuando sea necesaria la revocación para corregir simples errores aritméticos o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

En el evento en que el acto haya ocurrido por medios ilegales se requiere, como lo ha admitido esta Corte, que se encuentre debidamente probado que su expedición estuvo determinada e influida por la conducta ilícita de quien resulta favorecido con la situación subjetiva creada por aquél. Pero en todo caso, según se deduce de la preceptiva del art. 74 del C.C.A. se requiere que se adelante una actuación administrativa que garantice el debido proceso.

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

Y en una providencia más reciente, la Corte Constitucional reitera que se requiere de una abierta, abrupta e incontrovertible actuación ilícita, para que la administración pueda revocar un acto administrativo subjetivo, sin la anuencia del particular afectado:

SENTENCIA C-835 DE 2003, expediente D-4515, Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA, veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003)

"(...)

Al respecto ha dicho concretamente la Corte que si:

" (...)en el origen de la situación jurídica individual que se reclama, existe un vicio conocido por la administración, no puede permanecer sustentando un derecho, como si se hubiese adquirido al amparo de la ley", pues "...la circunstancia expuesta indica que el alegado derecho subjetivo, en cuanto tiene por sustento la violación de la ley, no merece protección. El orden jurídico no se la brinda, pues nunca lo ilícito genera derechos"⁴

En la misma sentencia, reiterada en este aspecto posteriormente⁵, se precisa sin embargo que en este caso se está frente a una excepción que por tanto debe ser entendida y aplicada con carácter restrictivo, por lo que:

"(...) esta Corporación comparte, en principio, el criterio expresado por el Consejo de Estado (Sentencia del 18 de julio de 1991), según el cual "los únicos actos de carácter particular que son susceptibles de revocación, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, son los que resultan de la aplicación del silencio administrativo positivo", ya que tanto las causales establecidas en el



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, a las que remite el 73 *Ibíd*em, como la de haberse perfeccionado el acto por medios ilegales tienen por presupuesto que el acto objeto de revocación tenga el carácter de ficto, es decir, que pertenezca a la categoría indicada. De lo contrario -esto es, si no se produjo en virtud del silencio administrativo positivo-, la revocación unilateral no procede, a menos que se trate de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada, cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico (Ver sentencias T-639 del 22 de noviembre de 1996. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa y T-376 del 21 de agosto de 1996. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara)

"Es claro que no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca. Debe darse una evidencia de ello y, en consecuencia, la motivación del acto revocatorio dejará constancia expresa acerca de los elementos de juicio que llevaron al ente administrativo a concluirlo así."⁶

Es decir que para esta Corporación, atendiendo el principio de buena fe y la presunción de legalidad que ostentan los actos de la administración⁷, amén de tener en cuenta razones de seguridad jurídica y de respeto a las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona mediante decisiones en firme⁸, salvo una evidente violación del ordenamiento jurídico, un acto de carácter particular y concreto solo podrá ser revocado con el consentimiento expreso del particular.

En una circunstancia de manifiesta ilegalidad, sin embargo, la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias.

El acto administrativo que así lo declare deberá en todo caso hacer expresa mención de dicha circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al convencimiento de la administración, lo cual implica necesariamente la aplicación de un procedimiento que permita a la Administración reunir dichos elementos de juicio.

Al respecto la Corte constata que de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular, ésta está sometida en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo (Resalta la Sala).

(...)" (subrayado y negrilla fuera de texto)



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. No 0533

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

Consejo de Estado

Por su parte, el máximo Tribunal en lo Contencioso Administrativo, ha realizado diversos pronunciamientos en torno a la revocatoria directa de los actos administrativos de contenido subjetivo, de los cuales vale la pena resaltar los siguientes:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Doctor JAIME ABELLA ZÁRATE, veintiuno de septiembre (21) de mil novecientos noventa (1990), Expediente N°. 2594.

"(...)

No puede la Administración de oficio revocar actos creadores de situaciones jurídicas de carácter particular y concreto sin incurrir en violación del Artículo 73 del C.C.A. Para poder hacerlo es necesario el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Es ésta una excepción al principio según el cual la Administración tiene amplia facultad de obrar en forma unilateral y obligatoria, sin perjuicio de que sus decisiones sean objeto de control jurisdiccional.

Sin la aquiescencia o asentimiento del particular afectado, la revocatoria de estos actos sólo es procedente cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causases previstas en el Artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 4260 del 06 de mayo de 1992. Magistrada Ponente Dra. CLARA FORERO DE CASTRO.

"(...)

Esta norma ha dado adversas interpretaciones, pero indudablemente introdujo una modificación en cuanto a la limitación para revocar directamente actos administrativos de carácter particular o subjetivo que hubieren creado derechos individuales.

Es necesario entonces, analizar cuidadosamente a fin de dilucidar si hace referencia únicamente a los resultantes del silencio administrativo positivo, o si se extiende la autorización para revocar directamente, sin el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho otros actos administrativos, cuando su excepción se hubiese conseguido por medios ilegales.

Tanto el artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, como el inciso lo. del 73 del C.C.A., tienen la finalidad, garantizar la protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones jurídica de carácter particular y concreto, para que



Continuación de la Resolución No. No 0 5 3 3

07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

no puedan ser revocados ni los unos ni las otras, en forma unilateral por la administración.

Sin embargo, no debe olvidarse que los derechos individuales según nuestra Constitución, merecen protección en tanto hubieren sido adquiridos conforme a las leyes, es decir, con justo título; y que el interés público prima sobre interés particular. Dicho en otros términos, solo los derechos adquiridos con arreglo a las leyes merecen protección; así lo establecía la Constitución de 1886 en su artículo 30 y también lo consagra la de 1991 en el artículo 58.

De manera pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del C.C.A., según el cual " Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores..." porque indudablemente se da la primera de las causales que dan lugar a la revocatoria directa.

A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos.

Obviamente sólo en el caso de los actos provenientes del silencio administrativo positivo, cuando se dan las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A., y cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto, puede revocarse directamente sin su consentimiento expreso y escrito; no cabe este proceder, cuando la administración simplemente han incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho. En ese caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo.

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

Expediente S.405, MAGISTRADO PONENTE: DR. JAVIER DIAZ BUENO, 1 de septiembre de 1998.

"(...)

A diferencia del Decreto 2733 de 1959, el Decreto 01 de 1984 contempló dos excepciones a la prohibición de revocar los actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares o reconocedores de derechos de igual categoría, sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular:

(...)



07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. 0 5 3 3

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

En primer término se reitera, que el derecho público, y en especial el derecho administrativo, reconocen como principio fundamental y democrático, que el acto administrativo subyace amparado en la presunción de legalidad, y por lo tanto de obligatoriedad, imperatividad y oponibilidad, motivo por el cual si el titular del derecho subjetivo, particular y concreto no presta su consentimiento para su revocación o cancelación, la administración carece de la facultad para hacerlo

(...)

La jurisprudencia de la Corporación, ha sido reiterativa en señalar que las autoridades en ejercicio de la función administrativa que les confiere la ley, no pueden modificar o revocar sus actos creadores de situaciones jurídicas subjetivas individuales y concretas, sin el consentimiento expreso y escrito de su titular. Si la entidad demandada consideraba que el acto revocado había sido expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, o en forma irregular, debió acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar su anulación. No debe olvidarse que la firmeza de los actos creadores de situaciones individuales y concretas garantiza la seguridad jurídica de la cual no pueden disponer de modo arbitrario los funcionarios.

(...)"(subrayas y negrilla fuera de texto)

Respecto de las excepciones consagradas en el inciso segundo del Artículo 73 del C.C.A, la Jurisprudencia unificada del Consejo de Estado mediante sentencia de interés jurídico IJ-029-02 (Consejo de Estado - Consejero Ponente Dra.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO - Fecha: Julio 16 de 2002), expresó lo siguiente:

"(...)

La interpretación que hizo la Sala del artículo 73 del C. C. A. sólo contempló la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se derive del silencio administrativo positivo, planteamiento que revisa la sala en esta oportunidad, pues una nueva lectura del citado artículo 73 del decreto 01 de 1984 permite ampliar el alcance que otrora señaló esta corporación y llegar a una conclusión diferente.

(...)

Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión "actos administrativos", para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.

Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto



Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.(...)

*Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A.
(...)"*

De la lectura de los extractos jurisprudenciales transcritos, puede notarse que existen algunas ambigüedades e imprecisiones respecto de la interpretación del artículo 73 del CCA¹⁴, sin embargo, es posible rescatar algunos elementos comunes, que en ausencia de una norma positiva más clara y específica, permitirán adoptar un criterio equilibrado y aplicarlo en el caso sub iudice.

En primer lugar, es claro que aunque nuestra legislación consagra el principio de inmutabilidad de los actos de contenido particular y concreto, la administración ostenta la facultad de retirarlos de la vida jurídica, sin el consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular, de manera restringida a la ocurrencia de dos (2) supuestos de hecho:

1. Cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69.

¹⁴ Al respecto puede verse a Jorge Enrique Santos Rodríguez en "Construcción Doctrinaria de la revocación del acto administrativo ilegal, Bogotá, 2005, Universidad Externado de Colombia.



Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

2. Si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales

En el segundo evento, es decir cuando el acto ocurre por medios ilegales, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales, debe tratarse de una maniobra fraudulenta, de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita, debidamente probada, cuya persistencia implique grave y actual quebranto al orden jurídico

No se trata entonces de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca, ni tampoco del acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.

El principio de inmutabilidad o intangibilidad de los actos administrativos de contenido subjetivo consagrado en el artículo 73 del CCA, encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, en el respeto de los derechos adquiridos, en la presunción de legalidad y en el principio de buena fe que debe reinar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.

Sólo cuando es evidente el despliegue de una conducta ilícita, que además de romper con la legalidad del acto, haya defraudado la buena fe que se presume en el obrar del particular frente a la administración, podrá ésta, aún sin el consentimiento escrito y expreso de aquel, invalidar el acto y retirarlo del mundo jurídico, ya que en este evento es claro que no habrá lugar a la consolidación de derechos, ni tampoco a la protección de la confianza legítima.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la presente actuación y con fundamento en los conceptos técnicos rendidos, las licencias urbanísticas contenidas en las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2 2002-112 del 10 de mayo de 2002 y las licencias de construcción No. LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C, se otorgaron en contravención de las normas urbanísticas aplicables.

No obstante lo anterior, y pese a las ilegalidades señaladas - dentro de la actuación administrativa de la revocatoria directa de un acto de carácter particular y concreto que no ha contado con la autorización expresa y escrita de su titular para revocarlo-, esta no es causal suficiente para que la Secretaría Distrital de Planeación proceda a su revocatoria directa toda vez que los vicios de que adolece, al predicarse y concretarse en el acto mismo, se encuadran en la causal primera del Artículo 69 del C. C. A., y no en la última parte del inciso segundo del Artículo 73 del C. C. A., conforme a los lineamientos señalados en la Sentencia de Interés Jurídico IJ - 029 - 2002 proferida por el Consejo de Estado.



No 0 5 3 3

07 JUL. 2008

Continuación de la Resolución No. _____

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTA D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

De la revisión y análisis de las piezas aportadas al trámite, no es dable deducir que las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y las licencias de construcción No. LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C., hayan sido producto o resultado de la ocurrencia de medios ilegales que hubieran influido en la libre manifestación de la voluntad del particular que en ejercicio de su función pública las expidió. En consecuencia, no se configura el supuesto de hecho señalado en el Inciso 2º del artículo 73 ibídem, para revocar directamente los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento expreso y escrito de sus titulares.

Así las cosas, en aplicación de las normas citadas y de la jurisprudencia transcrita, cuando se ha establecido que el acto se opone a la Constitución y a la Ley, al tenor de la causal primera del artículo 69 del C.C.A., es condición sine qua non, para la revocatoria directa del acto, conforme lo dispone el primer inciso del artículo 73 del C.C.A., contar con el consentimiento expreso y escrito del titular, el que en este evento, no fue otorgado según manifestación realizada por el apoderado de los titulares en sus distintas comunicaciones.

En conclusión, en el presente caso, no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para la revocación de un acto administrativo de carácter particular y concreto, toda vez que: i. Las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y las licencias de construcción No. LC-200-2-0086 del 17 de mayo de 2000 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No.2 de Bogotá D.C., no fueron el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo; ii. Sus titulares no otorgaron el consentimiento expreso y escrito para la revocación; iii. En la actuación que la Curaduría Urbana No.2 de Bogotá D.C., desplegó para expedir dichas actos, no existe prueba alguna que permita evidenciar, una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita de la administración o de los particulares interesados, razones todas para determinar que no es procedente la revocación directa de los referidos actos administrativos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería para actuar al doctor **JUAN MANUEL GONZALEZ GARAVITO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.427.548 y portador de la Tarjeta Profesional de abogado No. 62.209 del C.S de la J. dentro de los términos y para los efectos del poder otorgado el 5 de enero de 2007 por la sociedad TRIADA LTDA, el 7 de junio de 2006.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR la solicitud de revocatoria de las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070



Continuación de la Resolución No. _____

No 0533

07 JUL. 2008

Por la cual se decide la solicitud de revocatoria directa presentada por el doctor OSCAR GONZALEZ ARANA, CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C., contra las Resoluciones CU2-98-278 del 14 de diciembre de 1998, CU2-99-150 del 13 de agosto de 1999, CU2-2001-070 del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002 y de las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedida por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C.

del 13 de marzo de 2001, CU2-2002-112 del 10 de mayo de 2002, ni las Licencias de Construcción LC-2000-2-0086 del 17 de mayo de 2000, LC-2002-2-0046 del 30 de mayo de 2002 y LC 2002-2-0241 del 26 de junio de 2002, expedidas por la Curadora Urbana No. 2 de Bogotá D.C., por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al representante legal de la sociedad **TRIADA LTDA.** o a su apoderado y al **CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.**, advirtiéndoles que contra ella no procede ningún recurso de la vía gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al ciudadano **JORGE PABLO CHALELA ROMANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.361.594 advirtiéndole que contra ella no procede ningún recurso de la vía gubernativa.

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente Resolución a la **COMISIÓN DE VEEDURÍA DE LAS CURADURIAS URBANAS DE BOGOTÁ D.C.**

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente Resolución a la **DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, CONTROL y VIGILANCIA DE VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT** para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: COMUNICAR la presente Resolución a la **ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE** para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: ENVIAR copia de la presente decisión y de la totalidad de las actuaciones administrativas surtidas por la **CURADORA URBANA No. 2 de Bogotá D.C.**, a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que dicho organismo de control adelante las actuaciones de su competencia

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Bogotá D. C.

07 JUL. 2008


OSCAR ALBERTO MOLINA GARCÍA
Secretario Distrital de Planeación

Vo. Bo. Martha Eugenia Ramos 

Vo. Bo. Cecilia Calderón Jiménez – Subsecretaria Jurídica (E).

Revisó: Clara del Pilar Giner García – Directora de Trámites Administrativos. 

Proyectó: César Andrés Consuegra Rincón. 